

REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

DELITOS ECONOMICOS • CONTRAVENCIONAL •
GARANTIAS CONSTITUCIONALES • PROCESAL PENAL •
EJECUCION DE LA PENA

DIRECTOR

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

AREA PROCESAL

MIGUEL A. ALMEYRA

COMITÉ ACADÉMICO

EDUARDO AGUIRRE OBARRIO (ARGENTINA 1923-2011)

KAI AMBOS (ALEMANIA)

LOLA ANIYAR DE CASTRO (VENEZUELA)

LUIS ARROYO ZAPATERO (ESPAÑA)

DAVID BAIGÚN (ARGENTINA)

NILO BATISTA (BRASIL)

ROBERTO BERGALLI (ARGENTINA)

JORGE DE LA RUA (ARGENTINA)

EDGARDO ALBERTO DONNA (ARGENTINA)

LUIGI FERRAJOLI (ITALIA)

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA (CHILE)

JULIO B. J. MAIER (ARGENTINA)

SERGIO MOCCIA (ITALIA)

FRANCISCO MUÑOZ CONDE (ESPAÑA)

ESTEBAN RIGHI (ARGENTINA)

GLADYS ROMERO (ARGENTINA)

NORBERTO SPOLANSKY (ARGENTINA)

JUAREZ TAVARES (BRASIL)

JOHN VERVAELE (HOLANDA)

COORDINADORES

MATIAS BAILONE

RODRIGO CODINO

LA LEY

COMITÉ DE REDACCIÓN

GABRIEL IGNACIO ANITUA
FERNANDO ARNEDE
ALEJANDRO ALAGIA
JAVIER IGNACIO BAÑOS
RICARDO BASÍLICO
MARÍA LAURA BÖHM
MARIANO BORINSKY
JOSÉ ANGEL BRANDARIZ GARCÍA
SEBASTIÁN CABEZAS CHAMORRO
ROBERTO MANUEL CARLÉS
CARLOS CARAMUTI
CARLOS CHIARA DÍAZ
HORACIO DIAS
JAVIER DE LA FUENTE
DANIEL ERBETTA
ADRIÁN FERNÁNDEZ
RUBÉN E. FIGARI
GABRIELA GUSIS
MARIANO GUTIÉRREZ
AGUSTINA IGLESIAS

JAVIER DE LUCA
MANUEL MAROTO CALATAYUD
JULIANA OLIVA
GRACIELA OTANO
JORGE PALADINES RODRÍGUEZ
NELSON PESSOA
GABRIEL PÉREZ BARBERÁ
MARCELO RIQUERT
GUIDO RISSO
JOSÉ SAEZ CAPEL
CRISTINA SÁNCHEZ HENRÍQUEZ
SERGIO TORRES
RENATO VANELLI
FELIPE VILLAVICENCIO
JULIO VIRGOLINI
VERÓNICA YAMAMOTO
MYRNA VILLEGAS DÍAZ
ROMINA ZARATE
DIEGO ZYSMAN QUIRÓS

CON EL AUSPICIO DE

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA (ALPEC)

Criterios uniformes para el envío de colaboraciones

Los trabajos de doctrina y/o comentarios jurisprudenciales deben ser remitidos vía e-mail a laley.penal@thomsonreuters.com. Los mismos deben ir acompañados del curriculum vitae del autor y sus datos de contacto.

ISSN: 0034-7914

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 5074195

IMPRESO EN LA ARGENTINA - Propiedad de La Ley Sociedad Anónima - Tucumán 1471 - CP1050AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel.: (005411) 4378-4841

Nota de la Dirección: las opiniones vertidas en los comentarios firmados son privativas de quienes las emiten.



Víctor René Martínez (1939-2014)

POR **EUGENIO RAÚL ZAFFARONI**

El 13 de marzo último falleció en su Salta natal el Dr. Víctor René Martínez, profesor de Derecho penal y procesal penal en la Universidad Católica local, en la que también fuera Decano y Director del Departamento de Derecho Penal de su Facultad de Derecho.

Graduado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1967, Martínez ejercía la profesión libre y participó activamente en la elaboración de la legislación procesal de su provincia, la que en buena medida registra su sello, como co-redactor de la reforma de 2003. Nos deja una interesantísima obra escrita de muy buen nivel científico, en la cual sobresalen su Derecho Procesal Penal parte general (2008) y parte especial (2010), Policía preventiva y judicial (2000), Recurso de casación y tratados internacionales de Derechos Humanos (2002), La reforma del Código Procesal Penal de Salta, Ley n° 7.262/03 (2004), Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Salta (ley n° 7690/11) comentado (2012), Juicios y recursos en el nuevo Código Procesal Penal de Salta (2013), etc.

El catedrático de Salta era Académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Académico Honorífico de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales y Doctor honoris causa por la Universidad de Concepción del Uruguay.

Su frecuencia como expositor en congresos y seminarios de derecho penal y procesal penal en el país y en el extranjero, le había granjeado la amistad de sus colegas, no sólo por sus aportes técnicos, sino también en razón de su personalidad, de su entrañable bonhomía y de la sinceridad de su discurso, unidos a una admirable humildad.

Tenemos la certeza de que toda la comunidad jurídico penal lamenta profundamente su pérdida y, en lo personal, no podemos menos que echar de menos a quien fuera incondicional amigo a lo largo de décadas.

SUMARIO

DERECHO PENAL

DOCTRINA

Los delitos socioeconómicos y la responsabilidad del empresario por su posición de garante Por Carlos Lascano	3
La diversidad cultural y su injerencia en el anteproyecto de Código Penal Por Juan Manuel Lezcano	10
Inconstitucionalidad de la reincidencia Por Alejandro Sánchez Kalbermatten	17
El enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el Código Penal Por Carlos A. Gauna Kroeger	25

NOTA A FALLO

El cartero llama una vez
Por **Hernán D. A. Asensio Fernández y Adrián Tellas** 35

Prisión perpetua. Leyendo entre líneas dos fallos del Tribunal de Impugnación Penal de la Provincia de La Pampa
Por **Andrés Olie** 40

JURISPRUDENCIA

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA/ Importación de estupefacientes. Autoría (TS España).
Con nota de Hernán D. A. Asensio Fernández y Adrián Tellas 35

PENA / Homicidio criminis causa. Rechazo del planteo de inimputabilidad. Prisión perpetua. Constitucionalidad. Disidencia parcial (Trib. Impugnación Penal, Santa Rosa). *Con nota de Andrés Olie* 40

DERECHO PROCESAL

JURISPRUDENCIA AGRUPADA

Requisa personal sin orden judicial
Por **Jorge Alberto Diegues** 71

CRIMINOLOGÍA

DOCTRINA

El delito frente a la recesión económica. La complejidad del delito y las políticas criminales en Grecia desde el año 2009
Por **Sappho Xenakis y Leonidas K. Cheliotis** 77

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

DOCTRINA

La responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de los Derechos Humanos
Por **Delfina M. Wullich y Alejandro H. Ferro** 101

EJECUCIÓN DE LA PENA

DOCTRINA

El trabajo de las personas privadas de la libertad en la República Argentina (primera parte)
Por **Elsa Porta** 119

NOTA A FALLO

El deber irrestricto de la revisión judicial sobre las sanciones disciplinarias a procesados. Imposibilidad de argüir la preclusión como excusa para no ejercer la jurisdicción
Por **Andrés Gabriel Gómez** 132

Judicatura especializada en materia de ejecución penal: competencia para revocar la suspensión del juicio a prueba Por Marcela Meana	138
Autonomía, suicidio y normas carcelarias: Testeando el paradigma liberal Por Alejandro D. Carrió	149
JURISPRUDENCIA	
PROCEDIMIENTO PENAL / Sanción de un penado y derecho a la jurisdicción (CFCasación Penal). <i>Con nota de Andrés Gabriel Gómez</i>	132
CONDENA CONDICIONAL / Suspensión del juicio a prueba. Juez competente. Condiciones (TS Córdoba). <i>Con nota de Marcela Meana</i>	138
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / Interno que intentó autoinflingirse cortes en un antebrazo. Revocación de una sanción disciplinaria. Conducta que no constituye el tipo disciplinario del art. 8, inc. f, de la Ley 12.256 de la Provincia de Buenos Aires (JCorrec. Nro. 4, Mar del Plata). <i>Con nota de Alejandro D. Carrió</i>	149
<i>DERECHO TRIBUTARIO</i>	
<i>DOCTRINA</i>	
Impugnación de proveedores en el comercio de granos. Implicancias fiscales y penales Por Aurelio Cuello Murúa y Martín E. Scocco	161
<i>VIOLENCIA DOMÉSTICA</i>	
<i>DOCTRINA</i>	
Un nuevo avance en materia de violencia doméstica: La verificación por parte de las Fuerzas de Seguridad de la existencia de arma de fuego en poder o a disposición del agresor Por Ignacio González Magaña	169
Prohibiciones de acercamiento en materia de familia y delito de desobediencia Por Carlos Alberto Carbone	173
Juicio oportuno para las mujeres víctimas de violencia Por Soledad Deza	179
<i>POLÍTICA CRIMINAL</i>	
<i>NOTA A FALLO</i>	
La ley de estupefacientes no es una ley penal en blanco Por Alejandro O. Tazza	193

JURISPRUDENCIA

ESTUPEFACIENTES / Tenencia. Inexistencia de fines de comercialización. Constitucionalidad de la ley 23.737. Disidencia parcial (TCasación Penal, Buenos Aires). *Con nota de Alejandro O. Tazza* 193

DERECHO AMBIENTAL

DOCTRINA

Los tipos penales de la ley 24.051
Por **Pablo Cannata** 207

BIBLIOGRAFÍA

Tratado de Auditoría Forense (La investigación y prueba de los delitos de cuello blanco), por Raúl Ricardo Sacconi. Comentado por **Julio C. Báez** 221

Tratado de Derecho Penal (Tomos I a IV), por Carlos Fontán Balestra y Guillermo A. C. Ledesma. Comentado por **Marco Antonio Terragni**..... 222

ACTUALIDAD

Curso de Posgrado sobre Tecnologías de control, de identificación y territorio..... 227

1º Encuentro de jóvenes penalistas: discutiendo la reforma penal..... 229

El delito frente a la recesión económica. La complejidad del delito y las políticas criminales en Grecia desde el año 2009

POR SAPPHO XENAKIS Y LEONIDAS K. CHELIOTIS (*) (**)

Sumario: I. Introducción. — II. Recesión económica y delito. — III. Delitos de cuello blanco. — IV. Crisis, corrupción y culpa. — V. La constante corrupción en las altas esferas del gobierno y la impunidad oficial. — VI. Malestar popular y elites políticas. — VII. Delitos comunes e inmigración. — VIII. El discurso político y las actitudes públicas frente al delito. — IX. Índices sobre los delitos violentos contra la propiedad. — X. “Señales de disturbios” y las actitudes públicas frente al delito. — XI. Los beneficios políticos del fracaso. — XII. Violencia política ilegal. — XIII. La violencia antisistémica y sus límites. — XIV. Disuadir los disturbios. — XV. El beneficio electoral de la coacción. — XVI. Conclusión. — XVII. Financiación. — XVIII. Referencias.

Hasta ahora, la descripción y la explicación de la relación que media entre recesión económica y delito se han visto limitadas por el reducido ámbito de la actividad criminal seleccionada por la criminología. El estudio de dicha relación se ha tratado, casi de manera coincidente, desde el prisma de los delitos violentos contra la propiedad, y en menor grado, desde el ángulo de los delitos de cuello blanco. Como consecuencia de ello, se ha dificultado la apreciación de la importancia política de relaciones diversas y complejas entre una serie más amplia de otras formas de criminalidad durante los periodos de deterioro económico. Para demostrar el valor de tales conexiones al estudio de la mencionada relación, recurrimos a la experiencia de la crisis en Grecia, donde la importancia política de asociaciones entre corrupción, delitos contra la propiedad y violencia política ilegal, los vuelve componentes indispensables del vínculo entre recesión económica y delito en el contexto de ese Estado.

Palabras claves: recesión económica, crisis económica, corrupción, delitos contra la propiedad, violencia política, políticas criminales, Grecia.

I. Introducción

En las sociedades de todo el mundo existe una preocupación generalizada respecto a las causas y el impacto de la crisis económica internacional en curso. Al igual que en fenómenos anteriores, la relación entre las crecientes dificultades socioeconómicas y el delito constituye uno de los temas que más atención recibe en el discurso público, político y mediático. Por su parte, los estudios criminológicos han abordado el tema casi de manera coincidente, desde el prisma de los delitos violentos contra la propiedad y, en menor escala, desde el ángulo de los delitos de cuello blanco. Esto condujo a una visión distorsionada de los modos en que la recesión económica y los niveles y modelos de delitos pueden asociarse desde una perspectiva más holística que abarque tanto los delitos de cuello blanco como la violencia política ilegal. De manera similar, como consecuencia de este enfoque, las importantes conexiones que pueden existir entre las distintas formas de criminalidad fueron subestimadas; tales conexiones resultan evidentes tanto en el prominente rol que cumplen en el escenario político, como en las justificaciones invocadas por

(*) Traducción de María Virginia Agustini.

(**) Sappho Xenakis, School of Law, Birkbeck College, University of London, Malet Street, London WC1E 7HX, s.xenakis@bbk.ac.uk; Leonidas K. Cheliotis, School of Law, University of Edinburgh, Edinburgh, UK, l.cheliotis@ed.ac.uk.

los perpetradores respecto a su participación en actividades ilícitas.

Con el propósito de ayudar a ampliar el ámbito de investigación sobre la relación entre recesión económica y delito, este trabajo brinda una revisión multidisciplinaria de la bibliografía pertinente y recurre a la situación actual de Grecia, para atraer la atención de la importancia política de la interacción durante los periodos de crisis económica entre una variedad de criminalidad más amplia, que la que se estudió hasta el momento. Grecia constituye un caso ideal para analizar la mencionada relación, debido a la profunda crisis financiera que domina el país y a la magnitud de las ramificaciones políticas y socioeconómicas que le sucedieron. Grecia entró en recesión en el año 2008 y la crisis explotó por completo en el año 2009. Desde entonces su economía ha continuado reduciéndose con una persistencia sin comparación actual. El inicio de la crisis financiera desencadenó un importante ajuste en el mapa del poder político en el país, junto con el colapso en el apoyo a un sistema bipartidista que estuvo en el gobierno por más de 30 años y el ingreso en el parlamento de un grupo de extrema derecha con reputación de ejercer violencia física. Mientras tanto, la recesión y las medidas de austeridad adoptadas para facilitar los sucesivos rescates financieros tuvieron un impacto significativo y asimétrico en el ámbito socioeconómico del país. El desempleo aumentó de 9,4% en abril de 2009 a 22,6% en abril de 2012, el índice de pobreza subió de 20,1% a 30,3% entre 2009 y 2011, la calidad de vida disminuyó drásticamente desde fines del 2010 en adelante y las consecuencias negativas en la salud se incrementaron en forma dramática (ELSTAT 2012; EC 2012b). Los pobres sufrieron, en forma desproporcionada, la pérdida de ingresos a raíz de las medidas de austeridad, y los índices de pauperización aumentaron considerablemente respecto de quienes tuvieron menor acceso al poder político (Matsaganis y Leventi 2011; Matsaganis 2012).

Lo acertado de utilizar el caso de Grecia surge del hecho de que la crisis del país resaltó la relación diversa y compleja entre delito y recesión económica, al tiempo que la realidad del país también brinda un cruel testimonio de la importancia de las diferentes formas de delito en la vida política durante los periodos de crisis financiera. Con el objeto de ilustrar la relación entre recesión

económica y delito, este trabajo demuestra que el impacto criminógeno en la crisis financiera ha perdido lineamiento y uniformidad, no sólo en términos de delito violento contra la propiedad, sino también en relación con los delitos de cuello blanco, en la forma de corrupción y violencia política ilegal. Para enfatizar la importancia de la presencia y las interconexiones de las múltiples formas de criminalidad en la vida política bajo las actuales condiciones en Grecia, se señala que el crimen en sus diferentes manifestaciones juega un papel fundamental al exacerbar el malestar público frente a los partidos políticos dominantes así como también sirve como medio por el cual estos partidos han intentado manejar la creciente disconformidad pública, tanto simbólica como físicamente.

II. Recesión económica y delito

Los intentos para evaluar la relación entre recesión económica y delito fueron dificultados, por un lado, por la limitada disponibilidad de información relevante y el efecto distorsionador que interviene en los acontecimientos (ocurre, por ejemplo, que la criminalización de determinados comportamientos y la creciente actividad de investigación y de persecución, una vez surgida la crisis, pueden incidir en la frecuencia del delito) y, por el otro, los problemas relacionados con la comparación internacional de información (véase, además Shover 2000; Van Dijk 2008; Levi 2010; Huisman 2011). Frente a este panorama, los estudiosos, en cuanto a la relación entre recesión económica y delito, sólo han analizado el fenómeno de manera fragmentada. La investigación criminológica se centró en el potencial impacto criminógeno de la recesión económica y lo planteó desde el punto de vista de los efectos del deterioro económico derivado de la frecuencia y la gravedad de los delitos violentos contra la propiedad. En los estudios criminológicos poca atención se dio a los vínculos entre la recesión económica y los delitos llamados de cuello blanco. Tales estudios se enfocaron en la capacidad que estos últimos tienen para generar y exacerbar la recesión económica. Estos casos se estudiaron de forma independiente a otro tipo de criminalidad (algunas pocas excepciones son Box 1987; Detotto y Otranto 2012). Los académicos, principalmente aquellos ajenos a la criminología, han estudiado las razones delictivas y los efectos criminógenos de la recesión económica con referencia a la violencia política ilegal, especialmente

aquella que con esta finalidad criminaliza, desde la acción organizada por los grupos subestatales en el escenario nacional (así se habla de “delitos graves” o “terrorismo”), los disturbios públicos y hasta los abusos del poder de policía por parte del Estado (1).

Pese a la escasez de enfoques holísticos de la relación entre recesión económica y delito, singulares limitaciones respecto a la complejidad de las relaciones son evidentes en los resultados de los estudios referidos a las distintas formas de criminalidad. En lo que respecta a los efectos de la recesión económica en los delitos comunes, las realidades empíricas han cuestionado las suposiciones generalizadas de que los crecientes niveles de dificultad socioeconómica asociados al deterioro económico son siempre criminógenos. En los Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo, en los últimos años se ha observado una disminución en los niveles de los delitos violentos contra la propiedad, según muestran las estadísticas de delitos registrados por la policía y las encuestas llevadas a cabo con las víctimas de tales delitos (véase, por ejemplo, Campos y otros 2011; Finklea 2011; van Dijk y Tseloni 2012). Entre los países no angloparlantes, que vienen atravesando una crisis económica desde finales del año 2000, no todos han registrado incrementos en los índices de delitos registrados por la policía, y más aún en donde sí hubo aumento en el registro de delitos, éstos no siempre fueron graves, como robos y homicidios (UNODC 2012a). Muchos estudios previos encontraron sólo una ligera conexión entre recesión económica y ciertos tipos de delitos contra la propiedad (por ejemplo robos) y muy poca relación entre recesión económica y delitos contra las personas (véase, entre otros, Thomas 1927; Radzinowicz 1941; Henry y Short 1954; Short 1980; Cantor y Land 1985; Cook y Zarkin 1985; Arvanites y Defina 2006; Cook 2010;

comparar Rosenfeld 2009). En efecto, la relación entre recesión y delito resultó estar supeditada a otros factores, como son los índices de inflación y la magnitud de los obstáculos planteados a la actividad criminal por medio del encarcelamiento y la aplicación de la ley (Baumer y otros 2013, de próxima publicación; Institute for Economics & Peace 2013). En cambio, existen pocos estudios sobre el impacto macroeconómico de los delitos comunes y los resultados de esos estudios han sido poco esclarecedores. Mientras que algunas investigaciones no encontraron relación alguna entre el delito y la economía, en otros llevados a cabo en ciertos medios con escaso desarrollo económico, el incremento en el delito estimuló la disminución en la inversión extranjera contribuyendo así al subdesarrollo de la economía nacional; factores que pueden asociarse con la crisis económica (véase, por ejemplo, Detotto y Pulina 2012; también Pshisva y Suarez 2010).

Respecto al impacto de la recesión económica en los delitos de cuello blanco, los estudios disponibles indican la ausencia de una clara relación entre los dos. Las fases de contracción en el ciclo económico pueden traer un aumento en ciertas formas de delitos de cuello blanco (desde el fraude de seguros hasta el tráfico de influencias y fraude crediticio), mientras que otros delitos de la misma naturaleza, como los “hiperfraudes” profesionales y el de las tarjetas de crédito, pueden disminuir durante los periodos de recesión (lo último, a saber, en respuesta a los avances tecnológicos) (Levi 2010; Gill 2011; Gunnlaugsson 2012; véase también KPMG 2013). Entre tanto, las infracciones de cuello blanco, sean penales o civiles, se han encontrado, en forma reiterada, jugando un papel fundamental en la estimulación de la crisis financiera, por medio del cúmulo de presiones producidas por las dominantes prácticas fraudulentas en los sectores comerciales como bancos, financieras y empresas de telecomunicación (véase, por ejemplo, Calavita y otros 1999; Nguyen y Pontell 2010; Huisman 2012; Friedrichs 2013). En los países industrializados, los frágiles controles contra la corrupción han sido también fuertemente asociados con grandes déficits fiscales, que probablemente resultaron disparadores de la crisis financiera debido a que se percibían como insostenibles (Kaufmann 2010).

La relación entre recesión económica y violencia política ilegal ha sido también estudiada desde

(1) Otra explicación posible sobre la relativa omisión de la corrupción y la violencia política ilegal en la bibliografía criminológica referente a la relación entre recesión económica y delito puede ser porque suelen ser delitos menos frecuentes —en términos de sucesos registrados— que los delitos contra la propiedad. Dada la importancia de sus repercusiones políticas, económicas y sociales, no obstante, sugerimos que deben obligar la atención criminológica comparable. Respecto a una omisión más general de los delitos de cuello blanco y el terrorismo desde las inquietudes criminológicas, véase además, respectivamente Simpson y Weisburd (2009) y Mythen y Walklate (2006).

perspectivas causales e inversas, con resultados similares en complejidad y variedad. Los periodos de recesión económica y los consiguientes aumentos en el desempleo joven fueron asociados a un probable incremento de actividades terroristas, pero sólo en sociedades democráticas con altos ingresos (véase, además Blomberg y otros 2004; Caruso y Schneider 2011). Además, mientras que en Europa se identificó una clara relación entre la dimensión de los recortes presupuestarios y los conflictos sociales, éste no resultó ser el caso en otros sitios, y la recesión económica en sí —sea o no en Europa— ha demostrado tener una relación ambigua con los disturbios sociales (Ponticelli y Voth 2011). También hay evidencia que sugiere que la recesión económica está fuertemente relacionada con la excesiva violencia policial, aunque esto último puede continuar incluso después de mejoras en la economía (Box 1987; Fuentes 2005). En cuanto a los efectos macroeconómicos de la violencia política ilegal, la actividad terrorista tiene un efecto negativo en el crecimiento económico sólo en Estados con bajos niveles de desarrollo político e institucional, alta inestabilidad política y persistente terrorismo, mientras que otras formas de violencia política, como las protestas masivas, no tienen un efecto importante en el crecimiento económico (Meierrieks y Gries 2013; Jong-A-Pin 2009). En resumen, la criminología encuentra la relación entre recesión económica y violencia política como heterogénea en tiempo y espacio, reflejando los efectos intrínsecos de otras variables que intervienen, como por ejemplo, el nivel nacional de desarrollo económico, el grado de estabilidad político institucional y la dirección de una política exterior (Piazza 2006; Meierrieks y Gries 2012).

Aunque la complejidad y la evidente irregularidad de la relación entre recesión económica y delito puede servir para disuadir gran parte del compromiso criminológico con el tema, su importancia como objeto de investigación criminológico se vio reforzada por el protagonismo que logró entre la opinión pública, política y mediática, dentro del territorio nacional. De hecho, las razones de por qué la relación entre crisis económica y delito debería atraer dicha atención —cuando las bases empíricas al respecto han permanecido tan poco claras e inadecuadas— forman un rompecabezas que ha sido estudiado en su propio derecho. Esta línea de investigación constituye una parte pequeña pero significativa de una larga tradición de

criminología que ha investigado los intentos por parte de las élites políticas, para promover intereses a nivel personal, de grupo o asociaciones, sea por la evocación del delito en forma discursiva (principalmente en la forma popular, incluso en la violencia política y pocas veces en los delitos de cuello blanco, véase por ejemplo Quinney 1977; Garland 2001; Kappeler y Kappeler 2004; Simon 2007; Altheide 2006; Levi 2009; De Castella y otros 2009; Wacquant 2009) o incluso apoyando al crimen mismo, para promocionar, tácitamente o activamente, la violencia ilegal ejercida por los llamados actores “paraestatales” (véase, por ejemplo, Ganser 2005; Poynting y Whyte 2012). En este contexto de crisis económica, los investigadores han intensificado los modos en los que el crecimiento del delito real o imaginario, puede ser explotado por los políticos como una conveniente forma de distracción para calmar las ansiedades públicas. En su clásico libro *Policing the crisis*, por ejemplo, Hall y otros (1978) insinuó que la alarma social sobre un asalto cometido por hombres jóvenes negros en Gran Bretaña a principios de 1970 era en buena parte un invento del entonces Partido Conservador, que tenía la intención de manejar los desafíos políticos planteados por la supremacía de las políticas del libre comercio y la recesión en el país en ese momento. La utilización del discurso emotivo por los políticos ayudaron a abrir la puerta para la intensificación de un poder coercitivo del Estado y, al mismo tiempo, alentaron la desviación de las inseguridades económicas y ontológicas de un público más amplio, sobre la marginada población joven negra (estudios similares en Estados Unidos, véase, por ejemplo, Gilmore 2007; Hagan 2010).

Hasta ahora, sin embargo, ha habido poco interés en estos vínculos, tanto desde la política como de la práctica, que pueden unir distintas formas de criminalidad, en particular en tiempos de crisis económica. En algunos distritos, los políticos y los partidos políticos utilizan el delito para desviar la atención pública a otro tema. Por ejemplo, los políticos pueden centrar sus discursos en problemas o en delitos comunes como una “pantalla de humo” para desplazar la opinión pública de otro delito, políticamente sensible, que es el de cuello blanco (Chambliss 1999). Sin embargo, para nuestro conocimiento, los académicos han omitido la intensa importancia política de la compleja relación entre gran parte de los distintos tipos de delitos y en especial, entre tres clases principales,

que pueden acompañar a la crisis económica: delitos graves contra la propiedad, delitos de cuello blanco y violencia política ilegal. De manera similar, la baja apreciación parece ser el potencial durante los periodos de crisis económica para que un tipo de delito incite a otro, por ejemplo, cuando el compromiso de la elite en los delitos de cuello blanco provoca reacciones negativas en la forma de violencia política ilegal perpetrada por sus grupos subestatales. Con la atención puesta en el caso de Grecia, buscamos ilustrar por qué el análisis de la relación entre recesión económica y delito necesita investigar los vínculos que pueden existir entre las distintas formas de actividades ilícitas, desde el punto de vista de su ocurrencia y su representación en los dominios públicos y políticos.

III. Delitos de cuello blanco

Los delitos de cuello blanco son un componente esencial de la relación entre crisis financiera y comportamiento criminal y han tenido importantes ramificaciones en la vida política del país. En particular, la corrupción —en la forma de fraudes claramente ilegales o con apariencia de legales, abuso de autoridad y conductas orientadas al exclusivo beneficio personal, todos cometidos en sectores comerciales, públicos y oficiales mediante una vasta gama de prácticas financieras, bancarias y hasta sobornos, nepotismo y clientelismo— es comúnmente reconocida por haber desempeñado un papel fundamental en el aumento de la susceptibilidad de la economía griega frente a la crisis financiera. Además, en los primeros años que siguieron al surgimiento de la crisis, pese a que se efectuaron unos pocos arrestos y procesos simbólicos, la corrupción de la elite y la impunidad oficial hacia ella parecen continuar sin disminuir. Esto contribuyó a intensificar el malestar público frente a los partidos dominantes. De ese modo, también incrementó la necesidad política de buscar estrategias que permitan manejar el descontento general. En la presente sección se comienza por analizar los intentos realizados para culpar a la corrupción por la crisis, antes de acudir a la evidencia de la persistencia de la corrupción de elite y la impunidad oficial hacia ella luego de que estallara la crisis, considerando las implicaciones políticas en el consecuente crecimiento del malestar público frente a los partidos tradicionales.

IV. Crisis, corrupción y culpa

Muchos analistas nacionales e internacionales identificaron el modelo de corrupción en Grecia como el principal factor en el surgimiento de la crisis financiera que sufrió el país en el año 2009, orgánicamente relacionada a sobregastos y mala administración de los fondos públicos (ejemplo: Lynn 2011; Manolopoulos 2011). Aunque la corrupción en Grecia no fue, aparentemente, la causa de una crisis que se venía produciendo por los ecos de un sistema financiero internacional tambaleante (Varoufakis 2011), el papel desempeñado por la corrupción para exacerbar la frágil economía nacional explica por qué Grecia fue el primer país de la llamada Eurozona en caer en la más profunda de las crisis. Incluso, mientras hay un grado de consenso respecto a que la corrupción aumentó la vulnerabilidad de la economía del país llevándola al colapso, existe una considerable polémica en cuanto a que la corrupción haya provocado un gran daño a las finanzas del Estado, y si la población en general o las elites políticas comparten responsabilidad en este aspecto.

Por un lado, existe la teoría —ejemplificada en la frase expresada por el viceprimer Ministro de Grecia en el año 2010 “comemos todos juntos” (To Vima, 22 de septiembre 2010)— de que todos los niveles de la sociedad griega compartían la culpa por el precario crecimiento de las finanzas del Estado antes del estallido de la crisis. Ya que fueron cómplices de y se beneficiaron con las prácticas de clientelismo, las corrupciones menores y la evasión impositiva. De acuerdo con esta perspectiva, una parte suficiente de la población se confabuló con el clientelismo que yacía detrás de designaciones innecesarias y no calificadas en el sector público y la autorización oficial de prácticas injustas e ilegales como las frecuentes certificaciones otorgadas a propiedades construidas en forma ilegal (véase, por ejemplo, Skouras y Christodoulakis 2011; Transparencia Internacional - Grecia 2012). De manera similar, se dice que la sociedad ha fingido ignorancia en relación con las prácticas de clientelismo que respaldaron un conjunto fragmentado de privilegios de protección social otorgados a varios grupos comerciales pero negados a otros, por ejemplo, la inclusión de la peluquería y la fabricación de quesos, pero no de los bomberos o los recolectores de basura, dentro de la categoría de “profesiones peligrosas y arduas” que garantizaban la jubilación anticipada. Más allá

de la complicidad, ciertos grupos de interés entre la población general —sean distritos regionales o comerciales— han sido reiteradamente acusados de resistir los intentos de los políticos para desarrollar reformas estructurales que prometían desplazar las relaciones patrón-cliente (véase Featherstone 2011). Además, la población ha sido caracterizada como sistemáticamente perezosa y astuta —rasgos que suponen jugaron un rol atroz en gravar y retener, en forma simultánea, las finanzas del Estado (véase Bratsis 2011)—.

Existe un alto nivel de reconocimiento por parte de la población griega de que la corrupción es el principal problema nacional —un sentimiento compartido por el 98% de quienes respondieron a una encuesta en 2011. Otro sondeo realizado en 2012 también encontró una importante minoría de griegos que reconocían que la sociedad compartía algún tipo de responsabilidad por los problemas económicos que aquejaban al país. Por otro lado, hay una fuerte convicción entre los griegos en cuanto a que las prácticas corruptas son más frecuentes entre los políticos a nivel nacional y que el gobierno es el principal responsable por la crisis financiera del país (EC 2011b; PRC 2012). La evasión de impuestos es un tema que ha encapsulado las preocupaciones públicas sobre la culpa y la relativa distribución y el impacto de las prácticas corruptas.

La evasión impositiva, un vicio ampliamente reconocido por ser endémico en el país, se estima haber sido la causa del 48% del déficit presupuestario de 2008 y haber contribuido a un incremento en el déficit de ingresos tributarios, en los años previos a la erupción de la crisis de 2009, pese a que la economía griega gozaba de un índice de crecimiento del 4% durante el mismo período (Skouras y Christodoulakis 2011). Sin embargo, es dentro del 10% de la población, en términos de ingresos, donde la evasión de impuestos ha sido más corriente (Matsaganis y Flevotomou 2010), junto con ocupaciones más lucrativas que muestran estrechos lazos con los miembros del parlamento, quienes resultan ser los que más evaden impuestos (Artavanis y otros 2012). Según lo informó el Jefe de Investigaciones en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros del Ministerio Económico griego (SDOE) en 2012, aunque la evasión de impuestos, en el país, ha sido sistémica, las elites cumplen un rol fundamental a este efecto: en especial los políticos que fueron prác-

ticamente “inmunes” a la investigación, gracias a que el parlamento emplea tácticas de demora que debilitan la investigación de la SDOE (Die Welt, 8 de junio de 2012).

V. La constante corrupción en las altas esferas del gobierno y la impunidad oficial

Luego de que estallara la crisis financiera del año 2009, el descontento popular en cuanto a culpabilizar a la corrupción resultó exacerbado por la indulgencia que los políticos tradicionales continuaron mostrando respecto de la cometida en las altas esferas gubernamentales. Uno de los acontecimientos más importantes en este aspecto involucró a las medidas tomadas por los dos partidos políticos que han dominado el país en las últimas décadas, tras la caída del régimen militar en 1974 —el partido de centro izquierda PASOK y el de centro derecha Nueva Democracia— para evitar la responsabilidad legal por su participación en una cantidad de escándalos de corrupción, que sacudieron a los políticos griegos a finales del año 2000.

Uno de estos escándalos giró en torno a la estrecha relación entre el monasterio Vatopedi, del estado autónomo del Monte Atos, y altos miembros del partido Nueva Democracia, quienes acordaron la permuta de terrenos entre el monasterio y el Estado, que no sólo se basaron en decisiones oficiales de dudosa legalidad, sino que le costó al tesoro público la suma de aproximadamente 100-150 millones. Otro escándalo que irrumpió a finales del 2000 tuvo que ver con los sobornos de empresas extranjeras en contratos de seguridad civil y militar, un área de gasto estatal de contribución incomparable frente al nivel de la deuda pública, y según se cree sirve para encubrir los pagos irregulares y la generación de riqueza de los políticos. Resultó así que, entre 1997 y 2000, por ejemplo, Siemens Hellas pagó más de 100 millones en sobornos a políticos de alto rango de los partidos PASOK y Nueva Democracia, así como también a funcionarios, con el propósito de ganar contratos de telecomunicación, entre ellos la instalación de un sistema de vigilancia conocido como C4I, con antelación a los Juegos Olímpicos del año 2004. El sistema altamente complejo presentó deficiencias desde el mismo momento en que fue lanzado (Samatas 2011). En un caso similar, se descubrió que, a finales de 2000, la compañía alemana Ferrostaal pagó aproximada-

mente 230 millones en sobornos a miembros del gobierno del partido PASOK así como también a funcionarios, oficiales militares y ciudadanos de clase media con el objeto de asegurar la venta de submarinos al Estado griego, que ulteriormente resultaron inutilizables.

El modo en que estos escándalos fueron tratados en medio de la crisis financiera atrajo la atención pública por la gran protección que tenían los políticos respecto de los delitos de corrupción. De acuerdo con el art. 86 de la Constitución griega, los miembros en función o ex miembros del gabinete o de las secretarías sólo podrán ser investigados con el consentimiento del parlamento. Tal consentimiento, que requiere nada menos que una mayoría absoluta dentro del parlamento, debe ser dado antes de que finalice la segunda sesión anual parlamentaria. Además, la Ley 3126/2003 establece una prescripción de cinco años para la responsabilidad penal de los ministros, que fue invocada en forma satisfactoria en el año 2011 por PASOK y Nueva Democracia para evadir la responsabilidad legal por los escándalos de Siemens y Vatopedi (Transparencia Internacional - Grecia 2010). El caso de Ferrostaal fue la excepción a la regla, con el escándalo dirigido al arresto de alto perfil del ex ministro de defensa de PASOK, Akis Tsochatzopoulos, en 2012. Al momento de escribir el presente trabajo, Tsochatzopoulos se encontraba detenido por fraude de impuestos y actualmente está acusado por lavado de dinero y por aceptar un soborno de 8 millones por el negocio de los submarinos.

Igualmente decisivas para el creciente descontento popular en los años posteriores al surgimiento de la crisis financiera fueron las percepciones, aunque usualmente elípticas, manifestadas por los medios de comunicación en cuanto a la constante impunidad mostrada por los políticos tradicionales hacia la corrupción perpetrada por otros grupos pudientes. Grupos involucrados en el fraude, la malversación de fondos y la evasión impositiva. Una ley presentada en el año 2010 (Ley 3904), por ejemplo, establecía el retiro de cargos contra individuos sospechados de malversación, en caso de que los fondos fueran devueltos con antelación a la investigación. Esta ley desató la ira pública por su función en los múltiples escándalos que surgieron después de 2009 en los sectores bancarios griegos, entre ellos, el caso de Lavrentis Lavrentiades, un empresario farmacéutico que se convirtió en el

presidente de Proton Bank. Junto con un grupo de socios, Lavrentiades fue acusado por el presunto delito de malversación de millones de euros, parte de la cual (51 millones) originó investigaciones oficiales. En un evidente y último intento sin éxito por evitar la investigación, Lavrentiades devolvió al banco 51 millones (2).

En el año 2010, el gobierno griego presentó una amnistía fiscal, contradiciendo a la retórica política que se comprometía a contrarrestar la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Aunque esta medida fue muy criticada por no conseguir elevar los fondos prometidos y por permitir a los evasores pagar sólo pequeñas multas para evitar que se los investigue. En el año 2012, el gobierno consideró otro proyecto de amnistía, que fue retirado a principios del año 2013 debido a la presión internacional. Más provocador resultó el escándalo que estalló a finales del 2012, luego de que se descubriera que, entre 2010 y 2012, los ministros de economía del PASOK, George Papaconstantinou y Evangelos Venizelos no lograron asegurar las investigaciones a 2.000 griegos acaudalados sospechados de evasión impositiva, cuyos nombres estaban en una lista supuestamente proporcionada por el ministro de economía francés, Christine Lagarde, y la cual estaba "perdida". A mediados del 2013, comenzaron las investigaciones en relación con los presuntos nombres de esa lista, las cuales se llevaron a cabo de manera muy lenta. En general, hubo muy pocas pesquisas a adinerados evasores de impuestos en los años que le siguieron al inicio de la crisis, no obstante, un paulatino aumento en la cantidad de arrestos simbólicos se llevaron a cabo con un espectáculo mediático. Además, mientras la cantidad total de corrupciones menores descendió con el inicio de la crisis, junto con un retiro importante en la cantidad de sobornos pedidos por los sectores públicos y privados (Public Issue 2011), los ingresos no declarados entre las poblaciones más ricas parecen aumentar, contribuyendo a un incremento en la evasión impositiva (Matsaganis y Flevotomou 2010).

(2) Recientemente, en el año 2012, Lavrentiades fue acusado de fraude en relación con acusaciones de que el Proton Bank había emitido préstamos dudosos valuados en aproximadamente 700 millones a compañías de su propiedad o con las que estaba relacionado. Al momento de escribir este artículo, se encontraba detenido en espera de juicio.

VI. Malestar popular y elites políticas

Aunque la decepción popular respecto a la corrupción en las altas esferas gubernamentales y la impunidad oficial hacia ella ya hacía tiempo que se mantenía en el más alto nivel en comparación con otros países europeos, se agravó con el estallido de la crisis económica. Las tensiones surgieron a raíz de las declaraciones de los políticos que afirmaban que todos los niveles de la sociedad compartían la culpa por llevar el sistema a la crisis por medio de la corrupción. Al mismo tiempo estos políticos se auto-absolvieron por la responsabilidad en los casos de corrupción en el ámbito gubernamental y extendieron la inmunidad frente a la investigación a sus colegas en sectores comerciales y de medios de comunicación. Para explicar la magnitud del malestar público frente a la elite política del país, en 2011 se realizó una encuesta de opinión, la cual encontró que el 28,6% de los encuestados estaban dispuestos a atacar a los políticos con huevos y yogures, el 16,1% a golpearlos y el 12,5% a prender fuego a los autos de los miembros del parlamento y ministros (To Vima, 11/3/2012). Este malestar se exteriorizó tanto física como políticamente: con un crecimiento cada vez más frecuente de agresiones menores y amenazas a políticos (véase, por ejemplo, Ta Nea, 9/6/2012) y con el voto castigo que el electorado dio a los partidos PASOK y Nueva Democracia (3) en las elecciones del 2012 —las primeras elecciones después de estallada la crisis—.

En las décadas pasadas, el clientelismo pudo ayudar a apaciguar la consternación de las masas respecto a la corrupción de elite (Dobratz y Whitfield 1992), pero las condiciones de austeridad de

hoy han excluido esta costosa opción. Mientras tanto, la revocación de la impunidad hacia la corrupción de elite permanece inadmisibles en la medida que pueda poner en peligro a la elite respaldada por el *statu quo* político. Con la intención de manejar el malestar general sin perder el apoyo de la elite, los partidos PASOK y Nueva Democracia dirigieron la atención pública hacia temas relacionados con los delitos comunes y la inmigración.

VII. Delitos comunes e inmigración (4)

Desde que explotó la crisis económica, el discurso político dominante se ha centrado, principalmente, en los delitos violentos cometidos contra la propiedad, y en particular, en su relación con la inmigración. Este discurso se basa en estadísticas confeccionadas por la policía que muestran un incremento importante en hurtos y robos desde el inicio de la crisis y una cantidad significativa de extranjeros como autores de tales delitos. Esa criminalidad también se asocia con el aumento de otros fenómenos sociales, como son la pobreza urbana y la degradación social, lo que representa un deterioro en la calidad de vida y que sensibiliza a la población que teme ser víctima de esos delitos. En la medida en que exista un aumento en el delito y en los fenómenos asociados, y que este aumento haya sido conducido por la recesión y las ulteriores medidas de austeridad, resulta una paradoja significativa que los responsables de manejar la vida socioeconómica del país se hayan unido a la extrema derecha en el mantenimiento sistemático de la vigencia de la ley y el orden, aun

(3) En las elecciones generales, llevadas a cabo en octubre de 2009 (justo un mes antes de que estallara la crisis económica), PASOK obtuvo el 43,9% de los votos y Nueva Democracia el 33,5%. En mayo de 2012, se realizaron elecciones no decisivas en donde PASOK recibió el 13,2% y Nueva Democracia el 18,9%. En las siguientes elecciones, en junio de 2012, Nueva Democracia alcanzó el 29,7% y PASOK el 12,3%. Mientras, la concurrencia de los votantes cayó del 70,9% en el 2009 al 62,5% en junio de 2012 (la información sobre la votación se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio del Interior de Grecia). Tal lo sugirieron varios analistas, el hecho de que Nueva Democracia ganara por escasa mayoría de votos en la elección de junio de 2012, no fue tanto un apoyo público positivo para la rehabilitación de la reputación del país sino más bien una reverberación de preocupación pública para evitar la salida del país de la Eurozona.

(4) Las estadísticas que aparecen en esta sección respecto a los niveles y los modelos de delitos en Grecia se sustentan en el análisis que los autores realizaron de la información proporcionada por la Policía Helénica y por el Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana. Los cálculos de los índices per capita se realizaron sobre la base de los cálculos que, cada primero de año, aporta la Autoridad Helénica de Estadísticas (ELSTAT) sobre la población total del país. Como no hay una cifra disponible del 2011 y el 2012, la medición se calculó según los datos proyectados de ELSTAT para esos años congruentes con estimaciones anteriores. En 2011 se realizó un censo poblacional, pero Grecia aun no ha publicado sus resultados. El censo del 2011, que no tiene comparación con el censo del 2001, indica que el tamaño de la población estaba sobreestimado y más aún que disminuyó ligeramente, en lugar de aumentar, en el transcurso de la década (ELSTAT 2013). No resulta probable que los ajustes esperados puedan afectar el modelo de las tendencias denunciadas en el presente trabajo.

cuando al hacerlo así corren el riesgo de debilitar su popularidad. No obstante, esta fue la estrategia utilizada para aplacar el descontento de la población, no sólo respecto a la agenda de austeridad socioeconómica y a la distribución desigual de sus efectos negativos, sino también respecto a la audacia e indecencia de las elites para promocionarlo. Esta estrategia parece haber tenido éxito, desde el momento en que la preocupación popular sobre el delito se ha mantenido en altos niveles, según comparaciones europeas desde el comienzo de la crisis. El temor de convertirse en víctimas de un delito y el reclamo del castigo hacia los delincuentes parecen haber experimentado un aumento sustancial, en especial en relación con las poblaciones de inmigrantes, aunque la propia tasa de criminalidad no ha logrado confirmar terminantemente esa sensación.

A continuación, comenzaremos señalando la importancia otorgada al vínculo entre delito común e inmigración, y a los supuestos fenómenos asociados en el discurso político dominante y en las actitudes públicas desde el inicio de la crisis. Luego, demostraremos que, mientras la crisis ha generado un crecimiento significativo en los índices registrados por la policía respecto a la cantidad de delitos violentos contra la propiedad, las razones de este crecimiento no se explican ni en el discurso político ni en las actitudes públicas. Seguimos mostrando cómo la crisis financiera ha estimulado la existencia en público y en especial en las zonas urbanas de otros fenómenos sociales—inmigrantes de muy baja condición económica, drogodependientes y personas en situación de calle— cuya evocación ha contribuido de manera importante al temor generado por el delito y al reclamo del castigo entre los ciudadanos. Esta sección finaliza explicando las funciones estratégicas que el discurso político dominante pretende realizar en cuanto al delito y a los inmigrantes.

VIII. El discurso político y las actitudes públicas frente al delito

Desde el año 2009, cuando la crisis económica comenzó a manifestarse en Grecia, el discurso político dominante se volvió más alarmado por el aumento inexorable de los delitos violentos contra la propiedad, vinculándolos con la inmigración y otros fenómenos sociales como la pobreza urbana y la degradación social. El nexo entre delito, inmigración ilegal, pobreza urbana y degradación

social fue un tema central de la agenda política en vísperas de las elecciones nacionales de mayo y junio de 2012. PASOK, Nueva Democracia y el partido neofascista de extrema derecha *Chrysi Avyi* (“Amanecer Dorado”), entre otros, públicamente relacionaron los temas mutuamente a fin de ganar votos xenófobos. El Ministro de Protección Ciudadana del partido PASOK, Michalis Chrysochoidis, culpó a los inmigrantes ilegales por el 10% de aumento en asaltos y robos durante el 2011, refiriéndose a sus pobres condiciones de vida en el centro de Atenas como ‘una bomba para la salud pública’. El líder de Nueva Democracia y actual Primer Ministro, Antonis Samaras, se comprometió a recuperar las ciudades griegas de los inmigrantes ilegales y su supuesta criminalidad y enfermedades infecciosas. Los mensajes más violentos provinieron del partido *Chrysi Avyi*, que básicamente basó su campaña en una plataforma antiinmigración bajo el lema “nosotros podemos limpiar esta tierra de la suciedad”, y vio aumentar su apoyo electoral, que pasó de un escaso 0,29% de votos en el 2009 a un 6,92% en junio de 2012, de esta manera obtuvo 18 de las 300 bancas en el parlamento. Todo este discurso fue acompañado por acciones del gobierno en la forma de, por ejemplo, intensificación de la vigilancia a los inmigrantes y un intento por introducir una ley que previera la detención a los inmigrantes y a quienes buscaran asilo sospechados de representar un peligro para la sociedad (HRW 2012).

Los intentos por llevar la atención al delito en relación con los inmigrantes y las condiciones urbanas continuaron, incluso después de las elecciones y la formación de un gobierno de coalición dominado por Nueva Democracia y PASOK. En una serie de discursos parlamentarios y apariciones mediáticas, el Ministro de Protección Ciudadana, Nikos Dendias, resaltó lo que él llama la “increíble cantidad de extranjeros que participan en delitos graves” (To Vima, 8 de julio de 2012), en relación con los inmigrantes ilegales y en particular con el homicidio, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, así como también la miseria urbana (Athens News, 5 de agosto 2012). Según Dendias, es debido a la inmigración ilegal que Grecia “está perdida. El país nunca había sufrido una invasión de tal magnitud desde la llegada de los Dorios hace 4.000 años atrás (...). Esto es una bomba a las fundaciones de la sociedad y del Estado (...). La inmigración puede ser incluso un problema mayor que la economía” (To Vima, 6/8/2012). Una

dramática iniciativa policial reforzó este mensaje con una operación de “barrida”, paradójicamente llamada ‘Xenios Zeus’ (“Zeus Hospitalario”), en la cual la policía detuvo a cientos de inmigrantes mientras verificaba su situación legal (Cheliotis 2013a, próxima aparición).

El discurso político parece haber tenido un importante efecto en las actitudes públicas. De acuerdo con los datos de la encuesta de *Eurobarometer*, a pesar de que la preocupación en Grecia sobre el delito como tema de importancia nacional ha sido superada en el inicio de la crisis por inquietudes referidas a la economía, el desempleo, la inflación y la deuda gubernamental, se mantiene entre los niveles más altos de la UE. En efecto, la preocupación pública sobre el delito se duplicó entre 2008 y 2009; en tanto que el índice promedio nacional de preocupación sobre el delito en la UE, casi se redujo a la mitad siguiendo una disminución constante y gradual. De esta manera, aunque Grecia ha estado de acuerdo con (y, de hecho, ha guiado) el curso de la UE hacia el crecimiento económico entre los Estados miembros, su índice de preocupación pública sobre el delito excedió el promedio de la UE (EC 2008; 2009; 2011a; 2012c).

Desde el inicio de la crisis, de acuerdo a investigaciones desarrolladas a nivel nacional, los índices vinculados al temor de ser víctima de un delito son muy altos y parecen haber aumentado sustancialmente, según comparaciones efectuadas con estudios anteriores sobre el mismo asunto (véase Cheliotis y Xenakis 2011). En 2010/2011, en una encuesta realizada a nivel nacional por Giannakopoulou (2011), por ejemplo, casi nueve de cada diez encuestados pensaban que el delito había aumentado muchísimo en los últimos cinco años, dos tercios dijeron que suelen pensar en la posibilidad de ser víctimas de un delito y cerca de la mitad se sienten inseguros o muy inseguros, todos evitan caminar incluso por la zona de sus propios hogares luego de que oscurece. Los altos índices de ansiedad se refieren, concretamente, a las formas del delito común (ejemplo: asaltos, robo). En la misma encuesta, la causa más común del temor al delito tiene que ver con las actuales condiciones económicas y la incertidumbre financiera, más que con la creciente cantidad de inmigrantes y las minorías del país o con el aumento del delito, lo que parece ser indicativo de una creencia subyacente de que la pobreza

y las inseguridades socioeconómicas aumentan la inclinación de aquellos inmersos en esas condiciones, en general, inmigrantes, a involucrarse en prácticas delictivas (véase también To Vima, 27/5/2012). Existe evidencia que sugiere que el castigo público también se mantiene en altos niveles desde el inicio de la crisis y parece experimentar un incremento sustancial, en especial respecto a los delincuentes extranjeros (Giannakopoulou 2011; To Vima, 27/5/2012; Political Capital 2012), en la medida en que los datos permitan comparaciones con investigaciones previas (véase Cheliotis y Xenakis 2011; Jackson y otros 2011).

IX. Índices sobre los delitos violentos contra la propiedad

A primera vista, los datos registrados por la policía parecen ofrecer una explicación sobre el nivel y composición de las actitudes públicas y políticas frente al delito desde que estalló la crisis. Sin embargo, una mirada más profunda encuentra que estas actitudes resultan ser exageradas y burdamente prejuiciosas.

Entre 2009 y 2012, la cantidad total anual de robos y hurtos aumentó un 20,9% (de 72.658 a 87.912), mientras que el índice de robos y hurtos por cada 1.000 habitantes subió un 20,3% (de 6,4 a 7,7). La cantidad total anual de robos, durante el mismo periodo aumentó al 27,2% (desde 4.708 hasta 5.992), mientras que el índice de robos por cada 1000 habitantes aumentó un 26,8% (de 0,41 a 0,52). Durante los años 2009-2012, entre la cantidad total de ladrones con antecedentes policiales, la mayoría eran griegos (quienes alcanzan la cifra de 31.615, o el 53,1%, de los 59.490 de los imputados por esos delitos), pero los extranjeros estaban sobre-representados en proporción a su décima parte de la población general (alcanzando la cantidad de 27.875, o el 46,8%, de los 59.490 de encausados). No obstante, en lo que respecta a robos más violentos, la mayoría fueron cometidos por extranjeros (4585, o el 52,7%, de los 8684 delincuentes) y nuevamente resultaron proporcionalmente sobre-dimensionados.

Sin embargo, sería erróneo concluir que las tendencias en las actitudes políticas y públicas frente al delito han sido acordes a las actuales tendencias delictivas. En efecto, a pesar de que la preocupación pública sobre el delito como un problema nacional ha superado el promedio europeo, los últimos datos muestran que los recientes

índices de criminalidad han sido mitigados por los estándares europeos (UNODC 2012b). Incluso reconociendo un incremento en los indicadores delictivos, un análisis más detallado de los datos registrados por la policía revela tendencias variables, en términos de niveles y modelos, en las distintas formas de conductas ilícitas. Entre 2011 y 2012, de hecho, la cantidad de robos y hurtos disminuyó un 9,2% y los robos violentos un 9,7%. La ocurrencia de ciertos tipos de delito violento ha disminuido desde el inicio de la crisis. Mientras, el aumento porcentual en la ocurrencia de otros tipos de delitos resulta menos sorprendente cuando se expresa en términos de números absolutos y porcentajes *per capita*, pero también cuando se compara con el periodo previo a la crisis. Así, entre 2009 y 2012, la cantidad total anual de violaciones registradas por la policía bajó un 21,9%, de 214 a 167 y un 26,3% según la tasa por cada 1.000 habitantes (de 0,019 a 0,014). Al mismo tiempo, la cantidad total anual de homicidios ascendió un 15,3% (de 143 a 165) y entre 2011 y 2012 disminuyó un 10,3%. Según el índice por cada 1.000 habitantes, la cantidad de homicidios se incrementó un 16,6% desde 2009 hasta 2012 (de 0,012 a 0,014). De una forma u otra, la cantidad de homicidios se mantiene por debajo de la cantidad máxima experimentada en las últimas décadas: de 203, 0 0,018 por cada 1.000 habitantes, en 1997.

Igualmente, las tendencias en la composición de los delincuentes representan estereotipos y perciben a las minorías étnicas raciales como los principales actores detrás del supuesto auge delictivo. Entre 2009 y 2012, por ejemplo, la cantidad total de griegos entre los delincuentes denunciados a la policía por hurtos y robos ascendía al 60,2% (de 5.957 a 9.545), en tanto la respectiva cantidad de extranjeros aumentó a un modesto 13,7% (desde 6.313 hasta 7.184), también cayó ligeramente al 1,7%, entre 2011 y 2012. En 2009, los griegos integraban el 48,5% de todos los delincuentes denunciados a la policía por hurtos y robos, pero su proporción escaló al 57% en 2012. En cuanto a los robos violentos, la cantidad total de griegos denunciados a la policía aumentó un 65,3% entre 2009 y 2012 (de 782 a 1.293). La respectiva cantidad de extranjeros experimentó un incremento más bajo de 37,4% (de 796 a 1.094) y se redujo al 19,4% entre 2010 y 2012. En el año 2009 la proporción de griegos respecto a todos los delincuentes denunciados a la policía por robos violentos se plantó en 49,5%, pero alcanzó la mayoría, 54,1%, en 2012.

En cuanto al delito de violación, la cantidad de griegos se redujo un 4%, entre 2009 y 2012 (de 124 a 119), mientras que la de extranjeros sufrió una disminución entre esos mismos años, mayor a once veces (del 46%, de 128 a 69). De estas cifras resulta que, aunque los extranjeros estaban sobre-dimensionados en proporción a su participación en la población general, tanto en los conteos anuales como en el total del periodo de cuatro años, los griegos fueron incrementando las estadísticas hasta conformar la mayoría de los violadores denunciados (salvo por un pequeño intervalo entre 2007 y 2009). Por último, en relación con los homicidios, la cantidad de griegos sólo aumentó un 2,8%, entre 2009 y 2012 (de 249 a 256), mientras que la cantidad de extranjeros ascendió un 26,6% (de 124 a 157), aunque cayó al 12,7% desde 2011 al 2012. En cualquier caso, mientras que los extranjeros estaban sobre-dimensionados en proporción a su participación en la población general, en los conteos anuales y en el total del periodo de cuatro años los griegos resultaron nuevamente responsables por la mayoría de los homicidios.

Aquí debe destacarse que los datos disponibles no permiten determinar si las minorías étnico-raciales son más probables a ser víctimas de homicidio en Grecia, como fue establecido en otras partes de Europa (véase, por ejemplo, Liem y otros 2012). El predominio de la violencia racista en la Grecia contemporánea, sin embargo, parecería indicar esa dirección (aunque la comisión de un homicidio contra un integrante de una minoría étnico-racial no se encuentra necesariamente motivada por el origen étnico de la víctima). Las denuncias efectuadas por ONGs nacionales e internacionales se han incrementado rápidamente en los últimos años, de hecho, se describe a Grecia como “el ejemplo más acertado” en cuanto al modo en que la crisis financiera ha alimentado la violencia racista en Europa (RED 2012: 4; véase también HRW 2012; NCHR 2011b) (5).

(5) Respecto a los datos oficiales sobre la violencia racista, resultan poco fiables y tienden a subestimar su prevalencia, no sólo por las prácticas de registro y la poca investigación y el castigo de tales casos por parte de la policía y las autoridades judiciales, sino también por las pocas denuncias de las víctimas debido a la falta de confianza en el sistema de justicia penal griego, el temor a represalias y la activa disuasión por parte de la policía (AI 2012; HRW 2012; NCHR 2011b; RED 2012).

En cualquier caso, hay múltiples razones de por qué las estadísticas sobre delitos registrados por la policía necesitan ser tratadas con especial precaución cuando se usan para explicar los actuales índices de delitos. Esto abarca desde la facilidad con la que la policía griega presenta cargos injustificados, hasta la vigilancia sistemática a las comunidades de inmigrantes, como las llamadas operaciones de “barrida” o “limpieza” y la tendencia a detener, registrar y arrestar a personas extranjeras ya que los inmigrantes son más fáciles de detener debido a la falta de apoyo de un ambiente físico y social y la propensión de los griegos a denunciar delitos, aun en casos insignificantes, cuando se cree que los delincuentes —en forma acertada o errónea— son inmigrantes (Cheliotis y Xenakis 2011; véase también AI 2009). De hecho, dado que las fuerzas policiales están exentas de las redundancias masivas en el sector público y sus operaciones de “barrida” se han vuelto más frecuentes y agresivas desde que estalló la crisis, resulta razonable asumir el grado de aumento en la parte proporcional de inmigrantes en las estadísticas delictivas registradas por la policía.

X. “Señales de disturbios” y las actitudes públicas frente al delito

Capitalizando el temor popular de ser víctimas del delito y el reclamo de castigo hacia los delincuentes, según se expresa en los datos de los registros policiales, el discurso político dominante vincula el delito con un incremento en otros fenómenos sociales. Estos fenómenos, generalmente, denominados como “señales de disturbios” (Innes 2004), indican, comúnmente, el deterioro del “bienestar de la comunidad” o la “calidad de vida” que lleva a la sociedad, sea en forma acertada o errónea, a creer que existe un aumento en la posibilidad de ser víctimas de un delito.

Estudios previos, demostraron que el temor al crimen en Grecia está asociado con una alta percepción de la heterogeneidad étnica de la propia área de residencia (Ceobanu 2011; Semyonov y otros 2012), junto a la propia exposición a problemas relacionados con las drogas (por ejemplo, encontrar jeringas dejadas por los adictos a las drogas; van Dijk y otros 2007b; 2007a), y la degradación del ambiente físico (Vakiari y Kontargyri 2009). Otra investigación concluyó en que el reclamo de castigo resulta ser mayor entre los ciudadanos que sostienen que la inmigración

es el problema social más importante (véase además, Cheliotis y Xenakis 2011). Expresado en estas conocidas asociaciones cognitivas, el discurso político dominante está obligado a reforzar los niveles y modelos del temor al delito y el reclamo de castigo, ampliando el debate sobre la relación delito-inmigración e incluyendo referencias a la pobreza de los inmigrantes, al consumo de drogas y a las personas en situación de calle (véase, por ejemplo, EC 2011b). Estas referencias contienen un importante grado de verdad, al menos desde el momento en que la ocurrencia de cada uno de estos fenómenos se cree ha aumentado en las zonas urbanas, aunque sus relaciones con el delito permanecen, en el mejor de los casos, en discusión y en el peor de ellos, dubitativas.

Al tiempo que los elevados índices de desempleo han obligado a los inmigrantes legales a irse de Grecia y que la inmigración irregular en el país parece haberse estabilizado, existe una corriente de inmigrantes pobres en los centros de la metrópolis griega, en donde se establecieron redes de apoyo para ayudarlos a encontrar trabajo y vivienda. Mientras las características físicas distintivas de los inmigrantes, su pobreza y los diferentes usos que le dan a los espacios públicos (por ejemplo, se reúnen en las plazas para buscar trabajo) los han vuelto visibles para la sociedad griega (Kandylis y Kavoulakos 2011), tal visibilidad se volvió aún más prominente, a medida que la población de inmigrantes fue aumentando.

El tema del consumo de drogas en lugares públicos es similar. La tasa registrada por el consumo de droga ha sido, y continúa siendo, una de las más bajas de Europa, el último cálculo referido a los problemas con la droga en el país mostró un descenso desde 2009 hasta 2010, tal lo indica, por ejemplo, el índice de muertes, registrado por la policía, como producto del uso de drogas. Además, la cantidad anual de delitos relacionados con la droga y la correspondiente cantidad de personas acusadas por dichos delitos ha disminuido desde el año 2009. Sin embargo, la crisis económica ha causado un desempleo incontrolable, un deterioro en las finanzas personales y domésticas, una creciente incapacidad de los vínculos sociales (ej. familia y amigos) para proporcionar apoyo en el proceso de búsqueda o en el seguimiento de un tratamiento contra la adicción a las drogas y la imposición de drásticas reducciones a los fondos del Estado destinados a los principales centros de

rehabilitación, todo esto llevó a un incremento en la cantidad de adictos, tanto griegos como extranjeros, en las calles. Las “barridas” efectuadas por la policía en las zonas urbanas han provocado el desplazamiento de los adictos a nuevos distritos y barrios, la visibilidad de este problema se ha intensificado de manera inevitable ante la opinión pública (véase además, EKTEPN 2011; EMCDDA 2011).

Las personas sin hogar, a diferencia de la inmigración o del consumo de drogas, han aumentado desde que se disparó la crisis, tanto como un fenómeno en sí mismo como en términos de su presencia en áreas urbanas. De acuerdo con las organizaciones de ayuda, la combinación de la propagación del desempleo y la pobreza, los rigurosos recortes de fondos para los servicios sociales y la suspensión de los beneficios de vivienda han llevado a que la población de personas sin hogar aumente a un 25% entre 2009 y 2011, alcanzando las 20.000 personas. De manera importante, la composición de personas en situación de calle ha crecido de tal forma que va más allá de los inmigrantes pobres o de los adictos, y abarca, cada vez más, a la clase media griega que ha caído en bancarrota (EC 2012a), aunque son los extranjeros y los drogodependientes los primeros que caen durante las operaciones de “barridas” realizadas por la policía.

XI. Los beneficios políticos del fracaso

Parece verosímil que desde el año 2009 el incremento en algunas formas de delitos violentos contra la propiedad haya sido provocado por la recesión económica, que también generó las condiciones que ayudaron a exagerar la convicción de la prevalencia de dichos delitos en la opinión pública, llevando al centro de atención los propios “problemas de la población”, que el Estado y sus autoridades policiales pretenden “limpiar”. Tales resultados, no obstante, son políticamente problemáticos sólo en apariencia, ya que aportan convenientes temas de distracción y cantidad de verdaderas víctimas para calmar las ansiedades socioeconómicas y el descontento con las elites políticas. De manera similar, resulta contraproducente en forma superficial que las elites políticas griegas confiesen públicamente sus fracasos en los intentos por combatir el delito y los fenómenos asociados —una visión ampliamente compartida por los ciudadanos griegos, que por un lado han expresado la pérdida de confianza en la policía y

en el sistema de justicia del país y por el otro, han mostrado altos niveles de apoyo a la usualmente denominada “mano dura” para controlar el delito (Cheliotis y Xenakis 2011; véase también Hough y otros 2013, próximo a publicarse). Aquí, confesar la incompetencia sirve para representar la persistente o incesante aparición de los problemas que ayudan a justificar el continuo desplazamiento de las ansiedades socioeconómicas sobre el delito común y el descontento con las elites políticas a grupos foráneos y por lo tanto más vulnerables. En el último análisis, si el delito contra la propiedad es un problema conveniente, no se debe necesariamente al éxito de la intervención del gobierno. Es más bien porque son los ámbitos donde el reconocimiento público del fracaso por parte de las elites a cargo puede fortalecer el *statu quo* al centrar la atención en la ley y el orden y mantener la exigencia de su priorización por parte del gobierno (véase además, Cheliotis 2013b).

Además de ayudar a desplazar la atención del malestar popular contra los partidos dominantes, orientando ese sentimiento hacia una fracción marginada de la población, la priorización política del vínculo entre delito común e inmigración se ha combinado con la admisión de la ineficacia en el abordaje del problema, para apoyar el manejo del continuo malestar público, alimentando de este modo la violencia política.

XII. Violencia política ilegal

Las tendencias en el uso de la violencia política ilegal son importantes tanto para esclarecer los efectos de la crisis económica como para manifestar la significación política del crimen desde el inicio de la recesión y por las medidas de austeridad adoptadas. Las presiones socioeconómicas desatadas por la crisis fueron ampliamente previstas para impulsar las violentas campañas de grupos encubiertos identificados como provenientes de la extrema derecha o del anarquismo. Estos grupos han crecido en forma activa desde el año 2000 y han sido el centro del antiterrorismo del Estado griego (Xenakis 2012). También se ha sugerido, en el inicio de la crisis, que las presiones socioeconómicas han alimentado los repetidos casos de revueltas sociales en todo el país, al punto de llevar a una ruptura general y sostenida de la ley y el orden. Sin embargo, tales previsiones fueron resistidas por las tendencias en materia de violencia política: por un lado, no existe una clara relación, hasta el momento, entre las presiones

acumuladas durante la crisis y las medidas de austeridad, y por el otro, la violencia perpetrada en las protestas, ya sea por actores anarquistas o de izquierda o por manifestantes y huelguistas. Lo que ha experimentando un fuerte incremento desde el inicio de la crisis, ha sido el excesivo uso de la fuerza policial contra los manifestantes pacifistas y la violencia organizada de los miembros de grupos de extrema derecha, en contra de los inmigrantes, anarquistas e izquierdista. Los sucesivos gobiernos, sin embargo, han minimizado o facilitado la violencia llevada a cabo por la policía y los grupos de extrema derecha. Los gobiernos han centrado la atención pública y los intentos del Estado en derribar las amenazas propuestas por los anarquistas y los grupos de extrema derecha en la conducción de ataques organizados y para aquellos que participan en manifestaciones masivas en contra de las medidas de austeridad y de la corrupción política. Así, los gobiernos han apoyado de manera efectiva el desarrollo de un ambiente que resulta hostil para las personas que desafían el actual *statu quo*.

Esta sección comienza por aclarar las tendencias en la violencia antisistémica, antes de establecer los factores que sirven para limitar los disturbios, poniendo especial énfasis en el rol de la violencia por parte de la policía y de los grupos de extrema derecha. Terminaremos este apartado explicando cómo los partidos dominantes supieron sacar ventaja de la violencia policial y de la extrema derecha.

XIII. La violencia antisistémica y sus límites

En Grecia, las expectativas respecto a una creciente inestabilidad luego de la recesión económica (véase, por ejemplo, Papadopoulos 2012) en principio parecieron confirmarse por un incremento en los ataques perpetrados por organizaciones políticas encubiertas, identificadas como de izquierda o anarquistas —la cantidad de esos ataques aumentaron de 13 en 2008 a 15 en 2009 y 20 en 2010 (Europol 2010; 2013). Durante ese periodo, los grupos activos más prominentes, como *Epanastatikos Agonas* (Lucha Revolucionaria), *Synomosia Pynon tis Fotias* (Conspiración de Cédulas de Fuego) y *Sehta Epanastaton* (Secta de Revolucionarios), explicaron públicamente los motivos de sus ataques, en esas declaraciones, se destacaron las acusaciones contra las elites políticas, empresariales y mediáticas por su corrupción y por su codicia (Xenakis 2012; Kassimeris 2012).

Para el verano de 2010, las amenazas se intensificaron cuando *Sehta Epanastaton* —la más letal de estas organizaciones— prometió llevar al país a una “zona de guerra de actividad revolucionaria” (Xenakis 2012). No obstante, cuando el impacto de las medidas de austeridad comenzaba a sentirse en la sociedad griega y en especial entre los jóvenes, la violencia política de los grupos encubiertos subestatales de la extrema derecha caía de manera significativa. Después de una serie de arrestos y secuestros de armas en el transcurso de 2010 y 2011, sólo seis ataques fueron registrados oficialmente durante ese período y uno en 2012 (Europol 2013).

De manera similar, las hipótesis acerca de que el país estuvo al borde de una revuelta masiva parecían estar apoyadas por repetidos brotes de desorden público, una creciente politización de muchos griegos e inmigrantes y una acumulada experiencia en movilizaciones (véase, por ejemplo, Kouvelakis 2011; NCHR 2011a). Menos de un año antes del estallido de la crisis, Grecia sufrió su peor revuelta en varias décadas. Fue en diciembre de 2008, cuando la policía mató de un disparo a un adolescente en Atenas, como consecuencia de ello se produjeron a nivel nacional, semanas de sentadas, protestas y choques entre manifestantes y la policía. Luego de que estallara la crisis financiera y el primer paquete de medidas de austeridad se comunicara a la sociedad, los subsiguientes reclamos en mayo de 2010 generaron disturbios en todo el país. Los manifestantes intentaron irrumpir en el parlamento y un grupo encubierto lanzó una bomba a un banco, matando a tres trabajadores (Xenakis 2012).

Durante estas protestas, el enojo con la corrupción de la elite, así como la distribución y el impacto de la austeridad económica, fueron vociferadas por los participantes, bajo la consigna de “ladrones, ladrones.” Los medios de comunicación declararon que Atenas era una “zona de guerra”, que estaba en manos de la sociedad, en el verano de 2011 y en octubre del mismo año y en febrero de 2012, cada vez que el parlamento griego votaba la aprobación de medidas de austeridad para asegurar los fondos de rescate internacional. Según el primer ministro este desorden que estalló en febrero de 2012 fue el peor desde el año 2008 y los incendios de edificios históricos en el centro de Atenas mostraron dramáticamente el futuro apocalíptico que —de acuerdo con el debate parlamentario— amenazaba al país.

Sin embargo, desde principios del 2013, no se han repetido los disturbios de diciembre de 2008. Las manifestaciones de disconformidad en los años siguientes al inicio de la crisis han sido de una escala mucho menor a la que precedió la crisis. Las dificultades socioeconómicas ayudaron a desatar los disturbios en diciembre de 2008, pero las subsiguientes tendencias en las movilizaciones públicas que acompañaron las terribles condiciones socioeconómicas explicaron que las expectativas deterministas de la relación entre los dos eran erróneas (Kaplanis 2011). Ya para 2012, los expertos declaraban que había sólo un pequeño riesgo de que pudiese ocurrir una explosión social en Grecia dentro de los próximos años (Hughes 2012).

XIV. Disuadir los disturbios

Distintos factores explican por qué, después de la revuelta social que envolvió a Grecia en diciembre de 2008, no se volvieron a producir disturbios de igual magnitud pese al deterioro, cada vez mayor, de las condiciones socioeconómicas. Las muertes asociadas con la movilización de mayo de 2010 probablemente hayan tenido que ver con el fortalecimiento de la aversión de los manifestantes a incrementar la violencia en sus protestas (Renn y otros 2011). En cualquier caso, sin embargo, las posibilidades de una revuelta social se redujeron a simples manifestaciones y huelgas, habiendo perdido impulso la idea de una revuelta generalizada.

En los últimos años, la participación en las manifestaciones y huelgas se pudo disuadir desde el comienzo, debido a que se tomaron medidas judiciales y policiales con anticipación. Por ejemplo, en Grecia, la mayoría de las huelgas son ilegales, pero una modificación aprobada por el parlamento en 2009 reguló un procedimiento judicial para legalizar ciertas huelgas (Lampousaki 2009). La policía, por su parte, ha efectuado cientos de detenciones preventivas adelantándose a las manifestaciones planeadas, en especial de personas de izquierda o anarquistas que ya habían sido detenidas o arrestadas durante conflictos anteriores. La posibilidad de cualquier revuelta ha sido también impedida por un incremento en el uso de violencia excesiva por parte de la policía, que sirvió como una potente arma disuasiva. De acuerdo con Amnistía Internacional, la cantidad de casos denunciados alegando el uso excesivo de la fuerza y otros maltratos en contra de mani-

festantes pacíficos por parte de la policía griega, mostraron un incremento entre 2010 y 2012, el periodo en que comenzaron a implementarse las medidas de austeridad (AI 2012).

De manera similar, la revuelta ha sido desalentada por el impulso violento de los grupos de extrema derecha, acompañado por la inacción o incluso por la propia complicidad de la policía. Los grupos de extrema derecha son conocidos por involucrarse en las manifestaciones para intimidar o atacar a los manifestantes de izquierda o anarquistas; a veces provocan choques que sirven para disipar a los manifestantes y desanimar su participación en próximas manifestaciones. Mientras tanto, los ataques contra los inmigrantes por parte de grupos de extrema derecha —que antes de la crisis eran poco frecuentes— desde entonces se han incrementado de manera notable, tanto en cantidad como en intensidad. Cuadrillas de hombres vestidos de negro y armados con bastones y escudos patrullan los distritos de inmigrantes en Atenas, y suelen perpetrar ataques contra las personas y sus propiedades en todo Grecia, una vez más, con la aparente complicidad de la policía. Estas cuadrillas se supone que son subordinados de los miembros de *Chrysi Avyi*, pero no fue hasta muchos meses después de que el partido ingresara en el parlamento —por primera vez en el 2012— que dejaron de negar cualquier participación (HLHR y otros 2010; HRW 2012; Xenakis y Cheliotis 2013). A medida que *Chrysi Avyi* aceptaba responsabilidades, declaraba que sus acciones apuntaban a restablecer la ley y el orden en el país —una justificación ampliamente reproducida para explicar el surgimiento, la persistencia y la diseminación de la violencia de la extrema derecha. Los últimos informes que revelan que la policía envió a las víctimas del delito a buscar ayuda al partido *Chrysi Avyi* indican que la justificación de este fundamento ha sido autocumplido. Finalmente, sea intencional o no, la intimidación a las víctimas por parte de la extrema derecha puede también sembrar el temor de sufrir riesgos físicos por participar en las movilizaciones que pueden surgir en contra de las medidas de austeridad y la corrupción de la elite (6).

(6) Esto no es negar el hecho de que la violencia ejercida por la extrema derecha, como así también el caso de la excesiva violencia policial, han provocado movilizaciones de las víctimas y los grupos que simpatizan con ellos (Xenakis y Cheliotis 2013).

El gobierno ha desempeñado un rol esencial en el desarrollo de un ambiente hostil para las huelgas y protestas, y así para la revuelta, al mantener el estado de impunidad hacia la violencia ejercida por la policía y los miembros de la extrema derecha. De vez en cuando, los partidos dominantes han ofrecido cumplidos retóricos y legislativos para justificar dicha violencia, pero estos han llevado a un pequeño cambio sustantivo. Por ejemplo, luego de los reiterados pedidos de Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo, la Relatora Especial de las NU sobre Tortura y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, respecto a la creación de un organismo independiente que investigue las agresiones policiales, en 2011 el organismo se estableció legalmente, aunque fue muy criticado por la falta de independencia y mandato apropiado. Toda posibilidad de un gobierno dirigido a interrumpir la intensificación de la violencia policial frente a los manifestantes parecía incluso menos probable después de que se aprobara la Ley 4058 en 2012, art. 19. En dicha ley se exime a los agentes policiales, aprehendidos en el momento de cometer un crimen o poco después de cometerlo, de arresto inmediato y ulterior juicio, si esos actos han sido cumplidos en el ejercicio de sus funciones. Es más, a pesar de las presiones recibidas por parte de las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, el Estado griego no ha logrado reunir los estándares propuestos por la Unión Europea, en términos de registro, monitoreo, rapidez y efectividad en la investigación policial y en la violencia ejercida por la extrema derecha, así también como el castigo apropiado a los perpetradores y la indemnización a las víctimas. Con demasiada frecuencia, la violencia en el actuar policial así como la de los miembros de la extrema derecha, y la falta de respuesta por parte del Estado, han sido ignoradas e incluso justificadas en el discurso político (AI 2012; Basille y Kourounis 2011; HRW 2012; Xenakis y Cheliotis 2013).

XV. El beneficio electoral de la coacción

Al posibilitar la coacción por parte del Estado y de la extrema derecha, los partidos tradicionales han buscado mantener un ambiente en el que se contenga el malestar popular respecto a las medidas de austeridad y a la corrupción de la élite. El apoyo a la coacción, la propagación del temor popular a la violencia terrorista y a la posibilidad

de una desintegración social han permitido a estos partidos consentir a fracciones de la población autoritarias y xenófobas y así atraer sus votos, además de promover una alternativa electoral conveniente para los votantes indecisos.

En Grecia, las actitudes autoritarias y xenófobas tuvieron un intenso incremento desde el año 2009 en adelante y fueron seguidas por la victoria electoral de los partidos de derecha, su participación en conjunto del electorado ascendió del 5,9% en 2009 al 8,5% en 2012 (7). PASOK y Nueva Democracia supieron tomar ventaja directa de este acontecimiento en 2011, cuando incluyeron el partido de extrema derecha LAOS en un gobierno de coalición proyectado para asegurar la aprobación de las medidas de austeridad en el parlamento (Political Capital 2012). Indirectamente, PASOK y Nueva Democracia se beneficiaron con la creciente popularidad del partido *Chrysi Avyi*, que procuró absorber aquellos votos que de otra manera irían hacia su principal adversario para el cargo: Syriza, la coalición de la Izquierda Radical. Además para reflejar la plataforma anti-austeridad y altamente popular de Syriza, *Chrysi Avyi* atrajo a los votantes que querían que se tomaran acciones más decisivas respecto a la ley y el orden y la inmigración que las propuestas por Syriza. Desde luego, en las elecciones de junio de 2012, gran cantidad de seguidores de PASOK y Nueva Democracia dieron sus votos a Syriza, ayudando a incrementar su participación electoral del 4,6% en 2009 al 26,9%. Sin embargo, una proporción sustancial también cambió su apoyo a *Chrysi Avyi*, y así contribuyó a la reducida derrota de Syriza (To Pontiki, 21 de junio 2012).

XVI. Conclusión

Lo expuesto en este artículo ofrece una serie de contribuciones teóricas al estudio criminológico sobre la relación entre recesión económica y actividades ilícitas. En primer lugar, la crisis financiera puede asociarse con una gama más amplia de conductas criminales que las que, comúnmente, se conocían en la criminología. En el caso de

(7) Los votos de la extrema derecha se dividieron entre LAOS (Alerta o Concentración Popular Ortodoxa) y el partido neofascista *Chrysi Avyi*. En 2009, LAOS obtuvo el 5,6% de los votos, mientras que *Chrysi Avyi* consiguió sólo el 0,3%. En junio 2012, LAOS alcanzó el 1,6% y *Chrysi Avyi* logró el 6,9% de los votos.

Grecia, para comprender la conexión entre crisis y actividades delictivas, la corrupción y la violencia política fueron tan importantes como los delitos contra la propiedad. En segundo lugar, el impacto criminológico de la crisis económica puede carecer de lineamiento y uniformidad, no sólo en términos de delitos violentos contra la propiedad y delitos de cuello blanco, como lo han sugerido investigaciones anteriores, sino también en cuanto a la violencia política ilegal. En Grecia, mientras que la violencia ilegal identificada como proveniente de grupos de izquierda o anarquista en principio ascendió pero luego disminuyó, los disturbios masivos no tomaron impulso y se incrementó la violencia perpetrada por la policía y los grupos de extrema derecha. En tercer lugar, puede que haya vínculos ignorados, entre las distintas conductas criminales, que se intensifican y se vuelven más perceptibles en periodos de crisis económica y requieren de una investigación criminológica. Los temas de la corrupción de la elite y los delitos violentos contra la propiedad exigen una evaluación criminológica respecto a cómo han sido utilizados, sea por separado o en forma conjunta, como fundamentos para que los políticos nacionales se involucren en la violencia política. Mientras tanto, el incremento en la violencia ejercida por la policía y los grupos de la extrema derecha sirven, sea directa o indirectamente, para disuadir las revueltas.

Y así llegamos al cuarto término, nuestro enfoque en una gran variedad de delitos nos ha permitido identificar una relación más compleja entre delito y política, durante los periodos de crisis financiera, que la que se consideraba hasta ahora en la bibliografía pertinente. Una concepción ampliada del delito es crucial para comprender completamente las raíces y la magnitud del malestar público que se desarrolló en contra de los partidos tradicionales desde el surgimiento de la crisis económica, la presión política que esos partidos han enfrentado como consecuencia y las estrategias que han empleado en respuesta. El malestar público ha sido alimentado no sólo por la dificultad socioeconómica y la arbitrariedad de las medidas de austeridad, sino también por el delito que ha sido asociado con la crisis. Estos temas se refieren especialmente a la persistencia de la corrupción de la elite y la impunidad oficial hacia ella desde el inicio de la crisis, además de los intentos de los partidos tradicionales para culpar a la sociedad por las prácticas corruptas

que contribuyeron a la crisis en el inicio. Dada la naturaleza contra productiva del castigo inverso por la corrupción como una estrategia para desviar el descontento popular, los políticos buscaron un discurso y una práctica centrada en el delito común y en la violencia política ilegal. Por un lado, alimentando el temor al delito en relación con la inmigración, además del disturbio masivo y la violencia proveniente de la extrema derecha y de los anarquistas, que apunta a desplazar el malestar popular en objetivos más convenientes. Por el otro, la habilitación de la violencia policial y de la extrema derecha, ha funcionado para contener el electorado y las expresiones físicas del persistente malestar.

De lo expresado no debe concluirse que el delito como objeto de manipulación política logra necesariamente manejar la ira popular durante las crisis económicas. Al contrario, el profundo malestar popular puede poner límites a la efectividad de los intentos por controlarlo. Estos límites han sido demostrados en el caso de Grecia por la precariedad del *statu quo* político y el ascenso de Syriza. Al mismo tiempo, el hecho de que los partidos tradicionales hayan podido permanecer en el poder desde el comienzo de la crisis, aunque se tratase de un gobierno de coalición, es testimonio de la eficacia de sus conductas para lidiar con el alto grado de malestar popular, logrado en gran parte por la explotación del tema del delito.

XVII. Financiación

La presente investigación recibió fondos del *European Union Seventh Framework Programme* (FP7/2007-2013) conforme al convenio de subvención No. 246556, presentado por el Centro para la Investigación Sociológica sobre el Derecho y las Instituciones de Justicia Penal (CESDIP), París, Francia.

XVIII. Referencias

AI (Amnesty International) (2009), *Greece: Alleged Abuses in the Policing of Demonstrations*. London: AI.

AI (2012), *Police Violence in Greece*. London: AI.

Altheide, D. L. (2006), *Terrorism and the Politics of Fear*. Oxford: Rowman AltaMira.

Arvanites, T. M. and Defina, R. H. (2006), 'Business Cycles and Street Crime', *Criminology*, 44: 139-64.

- Artavanis, N., Morse, A. and Tsoutsoura, M. (2012), 'Tax Evasion Across Industries: Soft Credit Evidence from Greece', Working Paper, University of Chicago Booth School of Business. Disponible en: <http://faculty.chicagobooth.edu/adair.morse/research/TaxEvasionWeb.pdf> (último acceso 13 de Julio de 2012).
- Athens News (5 de agosto 2012), 'Operation "Xenios Zeus" Sweeps through Athens.'
- Basille, O. and Kourounis, A. (2011), Greece: Is the Crisis in Greece a Chance for Its Media? Paris: Reporters Without Borders.
- Baumer, E. P., Rosenfeld, R. and Wolff, K. (2013, próximamente), 'Are the Criminogenic Consequences of Economic Downturns Conditional? Assessing Potential Moderators of the Link between Adverse Economic Conditions and Crime Rates', in R. Rosenfeld, M. Edberg, X. Fang and C. Florence, eds., *Economics and Youth Violence*, New York: New York University Press.
- Blomberg, S. B., Hess, G. D. and Weerapana, A. (2004), 'Economic Conditions and Terrorism', *European Journal of Political Economy*, 20: 463-78.
- Box, S. (1987), *Recession, Crime and Punishment*. Basingstoke: Macmillan.
- Bratsis, P. (2011), 'Greek Corruption in Context', in L. K. Cheliotis and S. Xenakis, eds., *Crime and Punishment in Contemporary Greece*, 197-206. Bern: Peter Lang AG.
- Cantor, D., and Land, K. C. (1985), 'Unemployment and Crime in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis', *American Sociological Review*, 50: 317-32.
- Calavita, K., Pontell, H. N. and Tillman, R. H. (1999), *Big Money Crime*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Campos, C., Dent, A., Fry, R. and Reid, A. (2011), *Impact of the Recession*. London: Office for National Statistics.
- Caruso, R. and Schneider, F. (2011), 'The Socio-Economic Determinants of Terrorism and Political Violence in Western Europe (1994-2007)', *European Journal of Political Economy*, 27: S37-49.
- Coebanu, A. M. (2011), 'Usual Suspects? Public Views about Immigrants' Impact on Crime in European Countries', *International Journal of Comparative Sociology*, 52: 114-31.
- Chambliss, W. J. (1999), *Power, Politics and Crime*. Boulder, CO: Westview Press.
- Cheliotis, L. K. (2013a, próximamente), 'Behind the Veil of Philoxenia: The Politics of Immigration Detention in Greece', *European Journal of Criminology*, 10 —6—.
- Cheliotis, L. K. (2013b), 'Neoliberal Capitalism and Middle-Class Punitiveness: Bringing Erich Fromm's "Materialistic Psychoanalysis" to Penology', *Punishment & Society*, 15: 247-73.
- Cheliotis, L. K. and Xenakis, S. (2011), 'Crime, Fear of Crime and Punitiveness', in L. K.
- Cheliotis and S. Xenakis, eds., *Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives*, 1-43. Bern: Peter Lang AG.
- Cook, P. J. and Zarkin, G. A. (1985), 'Crime and the Business Cycle', *Journal of Legal Studies*, 14: 115-28.
- Cook, P. J. (2010), 'Property Crime—Yes; Violence—No: Comment on Lauritsen and Heimer', *Criminology & Public Policy*, 9: 693-7.
- De Castella, K., McGarty, C. and Musgrove, L. (2009), 'Fear Appeals in Political Rhetoric about Terrorism: An Analysis of Speeches by Australian Prime Minister Howard', *Political Psychology*, 30: 1-26.
- Detotto, C. and Otranto, E. (2012), 'Cycles in Crime and Economy: Leading, Lagging and Coincident Behaviors', *Journal of Quantitative Criminology*, 28: 295-317.
- Detotto, C. and Pulina, M. (2012), 'Does More Crime Mean Fewer Jobs and Less Economic Growth?', *European Journal of Law and Economics (Online)*:1-25.
- Die Welt (8/6/2012), 'Ms Lagarde is Quite Right!' [en alemán].
- Dobratz, B. A. and Whitfield, S. (1992), 'Does Scandal Influence Voters' Party Preference? The Case of Greece during the Papandreu Era', *European Sociological Review*, 8: 167-80.

- EC (European Commission) (2008), Standard Eurobarometer 69: Public Opinion in the European Union: National Report Greece [en griego]. Brussels: EC.
- (2009), Eurobarometer 71: Public Opinion in the European Union. Brussels: EC.
- (2011a), Standard Eurobarometer 74: Factsheet on Greece. Brussels: EC.
- (2011b), Special Eurobarometer 355: Poverty and Social Exclusion Report. Brussels: EC.
- (2012a), EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, June 2012. Brussels: EC.
- (2012b), EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, March 2012. Brussels: EC.
- (2012c), Standard Eurobarometer 76: Factsheet on Greece. Brussels: EC.
- EKTEPN (Greek Documentation and Monitoring Centre for Drugs) (2011), Annual Report 2011: The State of the Problem of Drugs and Alcohol in Greece [in Greek]. Athens: EKTEPN.
- ELSTAT (2013), 'Announcement of the Results of the 2011 Population Census for the Resident Population', Press Release, December 28.
- ELSTAT (2012), 'Labour Force Survey: 1st Quarter 2012', Press Release, June 14.
- EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2011), 2011 Annual Report on the State of the Drugs Problem in Europe. Lisbon: EMCDDA.
- Europol (2010), EU Terrorism Situation and Trend Report. The Hague: Europol.
- (2013), EU Terrorism Situation and Trend Report. The Hague: Europol.
- Featherstone, K. (2011), 'The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a Skewed Regime', *Journal of Common Market Studies*, 49: 193-217.
- Finklea, K. M. (2011), Economic Downturns and Crime, Congressional Research Service Report for Congress. Disponible en: www.fas.org/sgp/crs/misc/R40726.pdf (último acceso 1 de junio 2013).
- Friedrichs, D. O. (2013), 'Wall Street: Crime Never Sleeps', in S. Will, S. Handelman and D. C. Brotherton, eds., *How They Got Away With It*, 3-25. New York: Columbia University Press.
- Fuentes, C. A. (2005), *Contesting the Iron Fist*. New York: Routledge.
- Ganser, D. (2005), *Nato's Secret Armies*. Abingdon: Frank Cass.
- Garland, D. (2001), *The Culture of Control*. Oxford: Oxford University Press.
- Giannakopoulou, P. (2011), 'Fear of Crime in Greece', unpublished MSc dissertation, Institute of Criminal Justice Studies, University of Portsmouth.
- Gill, M. (2011), 'Fraud and Recessions: Views from Fraudsters and Fraud Managers', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 39: 204-14.
- Gilmore, R. W. (2007), *Golden Gulag*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Gunnlaugsson, H. (2012), 'Economic Crisis, Explanations, and Impact on Crime', *Criminology in Europe: Newsletter of the European Society of Criminology*, 11: 4-7.
- Hagan, J. (2010), *Who Are the Criminals?* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. (1978), *Policing the Crisis*. London: Macmillan.
- Henry, A. F. and Short, J. F. (1954), *Homicide and Suicide*. Glencoe, IL: Free Press.
- HLHR (Hellenic League for Human Rights), KEMO (Minority Groups Research Centre), and Institute for Rights, Equality and Diversity (2010), *Racist and Related Hate Crimes in the EU: Greece Country Report*. Disponible en: http://www.i-red.eu/resources/publications-files/raxen-ts-2010_racist-hate-crimes-in-greece.pdf (último acceso 29 de julio de 2012).
- Hough, M., Jackson, J. and Bradford, B. (2013, próximamente), 'The Governance of Criminal Justice, Legitimacy and Trust', in S. Body-Gendrot, R. Lévy, M. Hough, S. Snacken and K. Kerezsi, eds.,

The Routledge Handbook of European Criminology. Oxford: Routledge.

HRW (Human Rights Watch) (2012), Hate on the Streets: Xenophobic Violence in Greece. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0712_ForUpload.pdf (último acceso 13 de julio de 2012).

Hughes, K. (24 March 2012), 'What Future for a Greece in Crisis?', Open Democracy. Disponible en: <http://www.opendemocracy.net/kirsty-hughes/what-future-forgreece-in-crisis> (último acceso 9 de agosto 2012).

Huisman, W. (2011), 'Corporate Crime and Crisis: Causation Scenarios', *Sociology of Crime, Law and Deviance*, 16: 107-25.

— (2012), 'White-Collar Crime and the Economic Crisis', *Criminology in Europe: Newsletter of the European Society of Criminology*, 11: 8-12.

Innes, M. (2004) 'Signal Crimes and Signal Disorders: Notes on Deviance as Communicative Action', *British Journal of Sociology*, 55: 335-55.

Institute for Economics & Peace (2013), UK Peace Index: Exploring the Fabric of Peace in the UK from 2003 to 2012. Disponible en: www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2013/04/UK-Peace-Index-2013-IEP-Report.pdf (último acceso 1 de junio 2013).

Jackson, J., Gerber, M. and Côté-Lussier, C. (2011), 'Ideological Roots of Fear of Crime and Punitive Sentiment in Greece and the UK', in L. K. Cheliotis and S. Xenakis, eds., *Crime and Punishment in Contemporary Greece*, 45-64. Bern: Peter Lang AG.

Jong-A-Pin, R. (2009), 'On the Measurement of Political Instability and Its Impact on Economic Growth', *European Journal of Political Economy*, 25: 15-29.

Kandyliis, G. and Kavoulakos, K. I. (2011), 'Framing Urban Inequalities: Racist Mobilisation against Immigrants in Athens', *Greek Review of Social Research*, 136: 157-76.

Kaplanis, Y. (2011), 'An Economy that Excludes the Many and an "Accidental" Revolt', in A. Vradis and D. Dalakoglou, eds., *Revolt and Crisis in*

Greece, 215-28. London: AK Press & Occupied London.

Kappeler, V. E. and Kappeler, A. E. (2004), 'Speaking of Evil and Terrorism: The Political and Ideological Construction of a Moral Panic', in M. Deflem, ed., *Terrorism and Counter-Terrorism*, 175-97. Amsterdam: Elsevier.

Kassimeris, G. (2012), 'Greece's New Generation of Terrorists, Part 2: The Conspiracy of Cells of Fire (CCF)', *Studies in Conflict and Terrorism*, 35: 634-49.

Kaufmann, D. (2010), 'Can Corruption Adversely Affect Public Finance in Industrialized Countries?', *Opinions: Brookings Institution*, April 19. Disponible en: <http://www.brookings.edu/research/opinions/2010/04/19-corruption-kaufmann> (último acceso 5 de julio 2012).

Kouvelakis, S. (2011), 'The Greek Cauldron', *New Left Review*, 72: 17-32.

KPMG (2013), 'Fraud Barometer: Old-Fashioned Con Artistry Makes a Comeback', News Release, 21 de enero.

Lampousaki, S. (2009), 'New Law on Legality of Strikes', *European Industrial Relations Observatory Online*, 13 de enero.

Levi, M. (2009), 'Suite Revenge? The Shaping of Folk Devils and Moral Panics about White-Collar Crimes', *British Journal of Criminology*, 49: 48-67.

— (2010), 'Fraud Vulnerabilities, the Financial Crisis, and the Business Cycle', in R. Rosenfeld, K. Quinnet and C. A. Garcia, eds., *Contemporary Issues in Criminological Theory and Research*, 269-92. Belmont, CA: Wadsworth.

Liem, M., Ganpat, S., Granath, S., Hagstedt, J. and Kivivuori, J. (2012), 'Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden: First Findings from the European Homicide Monitor', *Homicide Studies* (acceso online; doi: 10.1177/1088767912452130).

Lynn, M. (2011), *Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis*. Hoboken, NJ: Bloomberg Press.

Manolopoulos, J. (2011), *Greece's 'Odious' Debt*. London: Anthem Press.

Matsaganis, M. (2012), 'Social Policy in Hard Times: The Case of Greece', *Critical Social Policy*, 32: 406-21.

Matsaganis, M. and Flevotomou, M. (2010), 'Distributional Implications of Tax Evasion in Greece', *GreeSE Paper No. 31*. London: Hellenic Observatory/LSE.

Matsaganis, M. and Leventi, C. (2011), 'The Distributional Impact of the Crisis in Greece', in V. Monastiriotis, ed., *The Greek Crisis in Focus*, 5-43. London: Hellenic Observatory/LSE.

Meierrieks, D. and Gries, T. (2013), 'Causality between Terrorism and Economic Growth', *Journal of Peace Research*, 50: 91-104.

Mythen, G. and Walklate, S. (2006), 'Criminology and Terrorism: Which Thesis? Risk Society or Governmentality?', *British Journal of Criminology*, 46: 379-98.

NCHR (National Committee for Human Rights) (2011a), *Annual Report 2010*. Athens: National Printing Office.

— (2011b), *Treatment of Racist Violence by the Police and Criminal Justice [en griego]*. Athens: National Printing Office.

Nguyen, T. H. and Pontell, H. N. (2010), 'Mortgage Origination Fraud and the Global Economic Crisis', *Criminology & Public Policy*, 9: 591-612.

Papadopoulos, G. (2012), 'Crisis in Greece: Anarchists in the Birthplace of Democracy', *Terrorism Monitor*, 10: 4-7.

Piazza, J. A. (2006), 'Rooted in Poverty? Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages', *Terrorism and Political Violence*, 18: 159-77.

Political Capital (2012), *A Broken Cordon Sanitaire*. Budapest: Political Capital. Disponible en: http://deconspirator.com/wp-content/uploads/2012/05/a_broken_cordon_sanitaire.pdf (último acceso 1 de junio de 2013).

Ponticelli, J. and Voth, H.-J. (2011), *Austerity and Anarchy: Budget Cuts and Social Unrest in Europe, 1919-2009*, Discussion Paper 8531. London: Centre for Economic Policy Research.

Poynting, S. and Whyte, D. (2012), 'Conclusion: Re-Connecting the Asymmetries of Political Violence', in S. Poynting and D. Whyte, eds., *Counter-Terrorism and State Political Violence*, 235-41. London: Routledge.

PRC (Pew Research Center) (2012), *European Unity on the Rocks*, Report of the Global Attitudes Project. Disponible en: <http://www.pewglobal.org/files/2012/05/Pew-Global-Attitudes-Project-European-Crisis-Report-FINAL-FOR-PRINT-May-29-2012.pdf> (último acceso 1 de junio de 2013).

Pshisva, R. and Suarez, G. A. (2010), 'Capital Crimes: Kidnapping and Corporate Investment in Colombia', in R. D. Tella, S. Edwards and E. Schargrodsky, eds., *The Economics of Crime*, 63-97. Chicago: University of Chicago/NBER.

Public Issue (2011), *National Survey on Corruption in Greece—2011*. Athens: Transparency International-Greece.

Quinney, R. (1977), *Class, State and Power*. New York and London: Longman.

Radzinowicz, L. (1941), 'The Influence of Economic Conditions on Crime', *Sociological*

Review, 33: 1-36.

RED (Rights, Equality & Diversity European Network) (2012), *Annual Report 2011*. Athens: RED.

Renn, O., Jovanovic, A. and Schröter, R. (2011), *Social Unrest*. OECD/International Futures Programme. Disponible en: <http://www.oecd.org/gov/risk/46890018.pdf> (último acceso 1 de junio de 2013)

Rosenfeld, R. (2009), 'Crime is the Problem: Homicide, Acquisitive Crime, and Economic Conditions', *Journal of Quantitative Criminology*, 25: 287-306.

Samatas, M. (2011), 'Surveillance', in L. K. Cheliotis and S. Xenakis, eds., *Crime and Punishment in Contemporary Greece*, 421-42. Bern: Peter Lang AG.

Semyonov, M., Gorodzeisky, A. and Glikman, A. (2012), 'Neighborhood Ethnic Composition and Resident Perceptions of Safety in European Countries', *Social Problems*, 59: 117-35.

Short, J. F. (1980), *An Investigation of the Relation between Crime and Business Cycles*. New York: Arno Press.

Shover, N. (2000), 'White-Collar Crime', in M. Tonry, ed., *The Handbook of Crime and Punishment*, 133-58. New York: Oxford University Press.

Simon, J. (2007), *Governing Through Crime*. Oxford: Oxford University Press.

Simpson, S. and Weisburd, D. (2009), 'Introduction', in S. Simpson and D. Weisburd, eds., *The Criminology of White-Collar Crime*, 3-14. New York: Springer.

Skouras, S. and Christodoulakis, N. (2011), 'Electoral Misgovernance Cycles: Evidence from Wildfires and Tax Evasion in Greece and Elsewhere', *GreeSE Paper 47*. London: Hellenic Observatory/LSE.

Ta Nea (9 de junio de 2012), 'From Moutjes to Yoghurt and Fists' [en griego].

To Pontiki (21 de junio de 2012), 'Who Voted What in the Elections of 17 June' [en griego].

To Vima (8 de julio de 2012), 'Dendias: The Security Corps are Not Substituted by Anyone' [en griego].

To Vima (27 de mayo de 2012), 'Immigrants and Crisis Strengthened Chrysi Avyi'.

To Vima (11 de marzo de 2012), 'When Anger Overflows and Fear is Excessive' [en griego].

To Vima (22 de septiembre de 2010), 'Theodoros Pangalos: Together We Ate the Money!' [en griego].

To Vima (6 de agosto de 2012), 'N. Dendias on Immigration: We have a New "Coming of the Dorians"' [en griego].

Transparency International-Greece (2010), *Countdown to Impunity: Statutes of Limitation in the European Union: Greece: National In-Depth Assessment*. Athens: Transparency International-Greece.

Transparency International-Greece (2012), *National Integrity Assessment-Greece* [en griego]. Athens: Transparency International.

Thomas, D. S. (1927), *Social Aspects of The Business Cycle*. New York: Gordon and Breach.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2012a), *Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime*. Vienna: UNODC.

UNODC (2012b), *Statistics on Crime*. Disponible en: <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html#crime> (último acceso 3 de octubre 2012).

Vakiari, G. and Kontargyri, K. (2009), *A Study of the Influence of Urban Space Planning on Citizens' Sense of Security* [en griego], Unpublished BA dissertation. School of Business Administration and Economics: Technological Educational Institute of Thessaloniki.

Van Dijk, J. (2008), *World of Crime: Breaking the Silence on Problems of Security, Justice and Development across the World*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Van Dijk, J. and Tseloni, A. (2012), 'Global Overview: International Trends in Victimization and Recorded Crime', in J. Van Dijk, A. Tseloni and G. Farrell, eds., *The International Crime Drop: New Directions in Research*, 11-36. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Van Dijk, J., van Kesteren, J. and Smit, P. (2007a), *Criminal Victimization in International Perspective*. Den Haag: WODC.

Van Dijk, J., Manchin, R., van Kesteren, J., Nevala, S. and Hideg, G. (2007b), *The Burden of Crime in the EU*. Brussels: Gallup Europe.

Varoufakis, Y. (2011), *The Global Minotaur*. London: Zed Books.

Wacquant, L. (2009), *Punishing the Poor*. Durham, NC: Duke University Press.

Xenakis, S. (2012), 'A New Dawn? Change and Continuity in Political Violence in Greece', *Terrorism and Political Violence*, 24: 437-64.

Xenakis, S. and Cheliotis, L. K. (2013), 'Spaces of Contestation: Challenges, Actors and Expertise in the Management of Urban Security in Greece', *European Journal of Criminology*, 10: 297-313. ♦